



# GACETA DEL CONGRESO

## SENADO Y CÁMARA

(Artículo 36, Ley 5ª de 1992)

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA  
www.imprenta.gov.co

ISSN 0123 - 9066

AÑO XXVII - N° 211

Bogotá, D. C., viernes, 4 de mayo de 2018

EDICIÓN DE 44 PÁGINAS

DIRECTORES:

GREGORIO ELJACH PACHECO  
SECRETARIO GENERAL DEL SENADO  
www.secretariassenado.gov.co

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO  
SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA  
www.camara.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

# CÁMARA DE REPRESENTANTES

## PONENCIAS

### **PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE EN CÁMARA DE REPRESENTANTES AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 017 DE 2017 CÁMARA**

*por medio del cual se crea la lista “Ser Pillo No Paga” vinculada a la Comisión de Delitos contra la Administración Pública y el patrimonio público como medida de castigo para los responsables por hechos de corrupción y se dictan otras disposiciones.*

Doctor

RODRIGO LARA RESTREPO

Presidente Honorable Cámara de  
Representantes

República de Colombia

Respetado señor Presidente:

En cumplimiento de la honrosa designación que como ponente único me hiciera la Mesa Directiva, de la manera más atenta, por medio del presente escrito y dentro del término establecido para el efecto, procedo a rendir informe de ponencia para segundo debate al Proyecto de ley número 017 de 2017 Cámara, *por medio del cual se crea la lista “Ser Pillo No Paga” vinculada a la Comisión de Delitos contra la Administración Pública y el patrimonio público como medida de castigo para los responsables por hechos de corrupción y se dictan otras disposiciones.*

#### **I. ANTECEDENTES**

1. El día cuatro (4) de abril de dos mil diecisiete (2017) el Representante a la Cámara Heriberto Sanabria Astudillo radicó ante el Despacho del Secretario General de la Corporación el presente proyecto de ley denominado “SER PILLO NO PAGA”, al cual se le asignó el número 249 de 2017 Cámara

y fue publicado en la *Gaceta del Congreso* número 222 de 2017.

2. El día 17 de mayo de 2017 el autor de este proyecto de ley le solicita por escrito al señor Presidente de la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes se inicie el trámite pertinente de estudio legislativo teniendo en cuenta que a esta fecha no se ha designado ponente o ponentes. De igual manera el honorable Representante Heriberto Sanabria manifiesta en el escrito que tiene conocimiento de que la Secretaria General de la Comisión le ha solicitado al Consejo Superior de Política Criminal que conceptúe sobre este proyecto por instrucción del señor Presidente.
3. En respuesta de fecha 23 de mayo de 2017 el señor Presidente de la Comisión Primera de Cámara manifiesta allí la improcedencia en la solicitud realizada por el autor para el inicio del trámite respectivo de estudio del proyecto de ley en esta célula legislativa debido a la obligatoriedad de contar previamente con el concepto del Consejo Superior de Política Criminal, así no sea vinculante, para lo cual cita en el texto el Decreto número 2055 de 2014 y la parte resolutive de la Sentencia T-762 de 2015.
4. La legislatura correspondiente al periodo 2016-2017 finaliza sin que el Consejo Superior de Política Criminal emita un concepto sobre el proyecto de ley y sin que el Presidente de la Comisión Primera designe ponente o ponentes, por lo cual este pro-

yecto de ley queda archivado en virtud de las disposiciones de la Ley 5ª de 1992.

5. El día veinticuatro (24) de julio de dos mil diecisiete (2017) el Representante a la Cámara Heriberto Sanabria Astudillo radica para la Legislatura 2017-2018 el proyecto de ley denominado “SER PILLO NO PAGA”, al que se le asigna el número 017 de 2017 Cámara y el cual es publicado en la *Gaceta del Congreso* número 595 de 2017.
6. Mediante el Acta número 009 de septiembre 12 de 2017 la Mesa Directiva de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes designa como Ponente para primer debate del Proyecto de ley número 017 de 2017 Cámara al honorable Representante Heriberto Sanabria Astudillo.
7. El día miércoles 6 de septiembre de 2017 llega al Despacho del honorable Representante Heriberto Sanabria autor del proyecto el concepto por parte del Consejo Superior de Política Criminal el cual se ha tenido en cuenta en la presente ponencia.
8. La Asociación Gremial Financiera Colombiana (Asobancaria) hace llegar vía email sus observaciones sobre el proyecto de ley “Ser Pillo No Paga”. Dichas observaciones se han tenido en cuenta para la presente ponencia.
9. El día 27 de septiembre de 2017 el autor de este proyecto envía al Despacho del Superintendente Financiero Colombiano un oficio en donde le solicita emitir concepto sobre el proyecto de ley “Ser Pillo No Paga”.
10. El día 9 de octubre de 2017 se radica en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes la ponencia para primer debate del Proyecto de ley número 017 de 2017 denominado “SER PILLO NO PAGA”. Así mismo, dicha ponencia es publicada en la *Gaceta del Congreso* número 912 de 2017.
11. El Proyecto de ley número 017 de 2017 es anunciado en sesión de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el día 4 de diciembre de 2017, de acuerdo al Acta número 15.
12. Mediante Acta número 16 del 5 de diciembre de 2017, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes discute y aprueba el Proyecto de ley número 017 de 2017 en primer debate.

## II. CONTEXTO DEL PROYECTO DE LEY

Con este proyecto de ley se pretende implementar medidas integrales agresivas en materia de lucha contra la corrupción en Colombia; la muerte financiera y permitir al Estado poder declarar la caducidad unilateral a un contrato

cuando su causal esté generada por prácticas que atenten contra la administración pública y el patrimonio público.

Como primera medida se propone crear una lista en la que se van a incluir las personas naturales condenadas penalmente por la comisión de delitos contra la administración pública y el patrimonio del público, de igual manera integrarán esta lista las personas jurídicas que sirvan o sean utilizadas para cometer los delitos ya enunciados.

Los incluidos en dicha lista la cual es denominada en el presente proyecto de ley como “SER PILLO NO PAGA”, tendrán un bloqueo de todos los productos financieros pasivos que tengan a su nombre en las entidades que son sujetas de vigilancia y control por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. Como consecuencia estas personas no podrán realizar ningún tipo de transacción en el sector durante el tiempo que dure la pena impuesta.

La Superintendencia Financiera de Colombia será la entidad que administre y garantice el buen funcionamiento de la lista “SER PILLO NO PAGA”.

Para complementar las medidas de ataque y castigo a los responsables de prácticas de corrupción pública y privada que afecten los recursos públicos, se ha incluido en este proyecto la modificación del artículo 18 de la Ley 80 de 1993 de la caducidad y sus efectos, en el cual se especifica que si un contratista incurre en alguna práctica que atente contra la administración pública y patrimonio del público no solamente durante la ejecución del contrato sino también, que dichas prácticas le hayan servido para adjudicarse de manera exitosa una licitación, podrá el Estado decretar la caducidad unilateral del contrato sin perjuicio de demandas en su contra ni el pago de indemnizaciones.

## III. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto de ley nace por la necesidad de atacar y castigar contundentemente y de manera ejemplar a los actores que llevan a cabo prácticas de corrupción pública y privada en Colombia, un desafortunado flagelo que cada día aumenta a pesar del esfuerzo de los entes de control para combatirla soportados por la ley, pero dichos esfuerzos parecen insuficientes porque cada vez estos escándalos se presentan en mayores dimensiones y lo más grave, los ciudadanos en su mayoría manifiestan ya estar acostumbrados a escuchar denuncias sobre supuestos malos e inadecuados manejos de los recursos públicos, en pocas palabras, “Eso se nos convirtió en algo normal y cotidiano”.

Colombia pierde 50 billones al año por corrupción, casi 1 billón por semana o 4% del PIB, las causas son generales y las alternativas de solución van desde ajustar la educación como medida de prevención y buscar así establecer una sensibilidad social donde se actúe acorde

a principios y valores que respeten todo lo que tiene que ver con lo público como algo sagrado, también una rígida legislación en donde se busca castigar a los responsables de delitos contra la administración pública y patrimonio del público pero que a la final ese esfuerzo arroja un saldo no muy alentador. Los casos más sonados de corrupción en Colombia concluyen en su mayoría en prescripciones, en penas cortas, en detenciones domiciliarias en lujosos lugares y los responsables radicados fuera del país y disfrutando de su patrimonio<sup>1</sup>.

Transparencia por Colombia señala que las condenas por corrupción en Colombia no llegan al 5% de las denuncias, la mayoría de las sanciones son disciplinarias y pocas terminan en condenas penales, el peculado y el cohecho son los delitos más denunciados, la lenta administración de justicia hace que las investigaciones prescriban por términos, además los acusados se valen de los subrogados penales y demás beneficios para esquivar el castigo merecido. A lo anterior hay que agregar que se desconocen cifras en lo referente a recursos recuperados o confiscados en Colombia relacionados con casos de corrupción, pasividad en la persecución de los activos corrientes y fijos de responsables de casos de corrupción, razón más que suficiente para que estos camuflen lo obtenido producto de su práctica y a futuro disfruten de esas fortunas<sup>2</sup>.

En la actualidad existe la denominada Lista Clinton, las personas y las empresas se incluyen ahí cuando las autoridades estadounidenses las señalan de financiar el terrorismo o el lavado de activos, y para este caso se efectúa el bloqueo de las cuentas bancarias una vez aparezca la persona o empresa en el registro de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC).

Se hace necesario en Colombia un mecanismo con un propósito similar en el sentido de bloquear y anular financieramente a los actores que practican estas actividades delictivas en las que se afecta el patrimonio público, la corrupción nos causa total desconfianza en las instituciones públicas, en los funcionarios públicos, pero además muchos billones de pesos que nunca se rastrean ni se recuperan afectando enormemente la retribución en inversión que tiene que hacer el Estado con los recursos que todos como ciudadanos entregamos o nos deducen para pagar impuestos.

El sector privado no se salva de este flagelo. En una encuesta a empresarios colombianos realizada por Ernest & Young sobre el fraude 2016, el 80% de ellos admitieron que en sus negocios existe corrupción, y el 30% estaría dispuesto a falsificar

estados financieros y pagar sobornos por un contrato<sup>3</sup>.

Sesenta (60) billones de pesos al año cuesta la corrupción del sector privado en evasión, cartelización, fraudes contables, robo del IVA, desvío de contribuciones de seguridad social<sup>4</sup>.

Lo preocupante de este asunto es que un alto porcentaje la conducta de privados siempre va a afectar de alguna manera al sector público por algún tipo de vínculo o relación de la empresa privada con el Estado. Las consecuencias se reflejan entre otras, en el freno al desarrollo de la economía y el aumento de la desigualdad.

Teniendo en cuenta lo anterior, es responsabilidad de todos atacar de manera directa, integral y sin contemplaciones ese cáncer de la corrupción que afecta al país y que viene aumentando día a día, con el fin de generar una transformación de raíz en la cultura ciudadana basada en los principios, valores y en la convicción de que “lo Público es Sagrado”.

Por otro lado las medidas a adoptar además de preventivas deben ser represivas y ejemplares a tal punto de que la sociedad tiene que entender que apropiarse de los recursos públicos y cometer delitos contra la administración pública le genera castigos no solo penales y administrativos sino también financieros, y de ahí la importancia también decretar la muerte financiera para que la sociedad piense dos veces o considere tomar un camino diferente al momento en que tenga una oportunidad o le planteen apropiarse de los recursos públicos de manera directa o indirecta.

Finalmente, se hace necesario en Colombia blindar al Estado para que no incurra en el pago de indemnizaciones por concepto de demandas a causa de personas o empresas que celebren contratos públicos donde medien actos de corrupción. En tal sentido, es necesario fortalecer el Estatuto de Contratación estatal (Ley 80 de 1993) con el fin de blindar la contratación pública y mitigar los actos de corrupción inmersos en las distintas etapas del proceso de contratación.

En efecto, son innumerables los casos de corrupción respecto de la contratación pública en distintos sectores tales como infraestructura, transporte, energía y social que le han costado miles de millones al Estado y a los contribuyentes. Es por esta razón que, si bien existen mecanismos sancionatorios de connotación disciplinaria, fiscal y penal. Ciertamente es que la corrupción se debe combatir desde todos los frentes posibles, es esa medida, se hace necesario extender las sanciones al ámbito financiero, sector que juega un papel importante

<sup>1</sup> Investigación realizada por el equipo de *El Tiempo*, el 26 de febrero de 2017.

<sup>2</sup> Investigación realizada por el equipo de *El Tiempo*, el 26 de febrero de 2017.

<sup>3</sup> Investigación realizada por el equipo de *El Tiempo*, el 26 de febrero de 2017.

<sup>4</sup> Investigación realizada por el equipo de *El Tiempo*, el 26 de febrero de 2017.

en los delitos contra el patrimonio público donde medie el cáncer de la corrupción.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se hace necesario modificar la Ley 80 de 1993, en cuanto a la caducidad del contrato estatal, en la medida en que los actos de corrupción deben ser una causal de caducidad indiscutible por parte del Estado siempre que medie orden judicial en la que se logre demostrar dichos actos corruptivos.

#### IV. PLIEGO DE MODIFICACIONES EN PRIMER DEBATE CÁMARA

Durante la discusión en primer debate en Cámara del Proyecto de ley número 017 de 2017 se presentaron las siguientes modificaciones surtidas desde la ponencia radicada en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y la presente ponencia para segundo debate.

- Mediante proposición presentada durante la discusión del Proyecto de ley número 017 de 2017 por el Autor y Ponente honorable Representante Heriberto Sanabria Astudillo, se adiciona un artículo nuevo al proyecto (artículo 9°) y es incluido en el capítulo IV. Por lo tanto, la vigencia (artículo 10) queda insertada en el Capítulo V. Esta proposición fue discutida y aprobada en la Comisión, según consta en el Acta número 16 del 5 de diciembre de 2017.
- La discusión se surtió en el sentido de apoyo a la iniciativa. Las intervenciones y observaciones de los Honorables Representantes que integran la Comisión, se dieron manifestando la necesidad de impulsar de manera vehemente iniciativas como estas. Dichas observaciones se encuentran en el Acta número 16 del 5 de diciembre de 2017.

#### V. CONCLUSIÓN

De acuerdo con lo anteriormente expuesto y con el pliego de modificaciones consignado en la presente, como ponente encuentro razones adecuadas y pertinentes para que se dé trámite en segundo debate a esta iniciativa legislativa.

Por lo cual presento la siguiente:

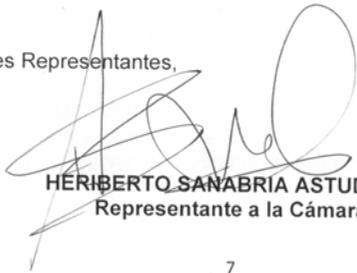
#### VI. PROPOSICIÓN

Con las anteriores consideraciones y observaciones, en cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 5ª de 1992, me permito rendir ponencia favorable al Proyecto de ley número 017 de 2017 Cámara, *por medio del cual se crea la lista “Ser Pillo No Paga” vinculada a la comisión de delitos contra la administración pública y el patrimonio público como medida de castigo para los responsables por hechos de corrupción y se dictan otras disposiciones*, y en consecuencia solicito muy amablemente a los miembros de la Honorable Cámara de

Representantes dar segundo debate conforme al texto con el pliego de modificaciones presentado.

De los Honorables Representantes,

De los Honorables Representantes,



HÉRIBERTO SANABRIA ASTUDILLO  
Representante a la Cámara

7

#### TEXTO DEFINITIVO PARA SEGUNDO DEBATE EN CÁMARA DE REPRESENTANTES DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 017 DE 2017 CÁMARA

*por medio del cual se crea la lista “Ser Pillo No Paga” vinculada a la Comisión de Delitos contra la Administración Pública y el patrimonio público como medida de castigo para los responsables por hechos de corrupción y se dictan otras disposiciones.*

El Congreso de Colombia

DECRETA

CAPÍTULO I

#### Disposiciones generales

Artículo 1°. *Objeto.* La presente ley tiene por objeto la creación de la Lista “SER PILLO NO PAGA” vinculada a la comisión de delitos contra la Administración Pública y el Patrimonio Público.

Artículo 2°. *Naturaleza.* La lista “SER PILLO NO PAGA” será el mecanismo de castigo financiero severo y ejemplar para las personas naturales y jurídicas que cometan delitos contra la Administración Pública y el Patrimonio Público.

Artículo 3°. *Principios.* La presente ley estará regida por los principios del Debido Proceso definido en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, Legalidad, artículo 6° Ley 599 de 2000, Transparencia y Publicidad consagradas en la Ley 80 de 1993 y los principios generales del derecho.

Artículo 4°. *Competencia.* Facúltese a la Superintendencia Financiera de Colombia para crear la lista “SER PILLO NO PAGA”, además de administrar, actualizar y regular la información contenida en la lista “SER PILLO NO PAGA”.

Parágrafo 1°. La Superintendencia Financiera de Colombia garantizará el buen funcionamiento de la lista “SER PILLO NO PAGA”, para lo cual podrá articular con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) o la entidad (es) u organismo (s) que considere, para ajustar un Sistema de Administración de información ya existente o implementar uno nuevo.

La creación e implementación de un nuevo sistema de administración de información o el acondicionamiento o ajuste a uno ya existente

para el funcionamiento de la lista “SER PILLO NO PAGA” por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, cumplirá lo consagrado en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 “*Por la cual de dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*”.

## CAPÍTULO II

### **Del funcionamiento y procedimiento de la lista “Ser Pillo No Paga”**

Artículo 5°. Confirmado el fallo condenatorio mediante sentencia judicial debidamente ejecutoriada, por los delitos consagrados en la Ley Penal, Ley 1474 de 2011, Ley 1778 de 2016 y sus normas modificatorias y concordantes así como lo dispuesto en la convenciones o tratados suscritos y ratificados por Colombia en materia de lucha contra la corrupción que atenten contra la Administración Pública y el Patrimonio Público, impuesto a las personas naturales, representantes legales de personas jurídicas definidas en el artículo 633 del Código Civil y en aquellas personas que recaiga responsabilidad administrativa como miembros de junta directiva, socios, contratistas y empleados, deberá el juez natural de oficio remitir copia de los fallos a la Superintendencia Financiera de Colombia.

Artículo 6°. La Superintendencia Financiera de Colombia notificará a todas las entidades sujetas de su control y vigilancia, la inclusión en la lista “SER PILLO NO PAGA” de las personas naturales, representantes legales de las personas jurídicas, además de los mencionados en el artículo anterior por los delitos contra la Administración Pública y Patrimonio Público.

Parágrafo 1°. Las personas jurídicas que hayan sido utilizadas como medio o instrumento por parte de los representantes legales o personas en las que recaiga responsabilidad administrativa tales como; miembros de junta directiva, socios, contratistas y empleados para cometer delitos contra la Administración Pública y el Patrimonio Público serán incluidas en la lista “SER PILLO NO PAGA”.

Artículo 7°. Las personas naturales y jurídicas incluidas en la lista “SER PILLO NO PAGA” tendrán un bloqueo en todos los productos financieros pasivos que tengan a su nombre en las entidades que son sujeto de vigilancia y control por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, por lo cual no podrán realizar ningún tipo de transacción en el sector durante el tiempo que dure la pena impuesta. Además de las sanciones estipuladas en el Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades.

La permanencia de las personas naturales en la lista “SER PILLO NO PAGA” será igual al tiempo de la pena o condena contenida en el fallo.

Para el caso de las personas jurídicas, la permanencia en la lista “SER PILLO NO PAGA” será igual al tiempo de la pena impuesta al

representante legal o personas en las que recaiga responsabilidad administrativa tales como; miembros de junta directiva, socios, contratistas y empleados.

En caso de que existan varias condenas en diferentes personas de las enunciadas en el inciso anterior, el tiempo de permanencia en la lista será equivalente a la pena más alta impuesta sobre ellos.

## CAPÍTULO III

### **Modificaciones a la Ley 80 de 1993**

Artículo 8°. Modifíquese el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, el cual quedará así:

**De la caducidad y sus efectos.** La caducidad es la estipulación en virtud de la cual si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencia que puede conducir a su paralización, la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre.

**Parágrafo 1°.** Adicional a lo dispuesto en el presente artículo, será causal de caducidad cuando se logre establecer mediante sentencia judicial que el contratista incurrió en actos de corrupción de los contemplados en la Ley 412 de 1997, Ley 1474 de 2011 y sus normas modificatorias o de cualquiera de las conductas delictivas contempladas por las convenciones o tratados de lucha contra la corrupción suscritos y ratificados por Colombia.

También se podrá decretar la caducidad cuando mediante sentencia judicial se logre establecer que el contratista responsable de cumplir con el objeto contractual, logró la adjudicación y suscripción del contrato mediante la comisión de delitos contra la administración pública, el patrimonio económico del Estado y actos de corrupción, contemplados en la Ley 599 de 2000, 1474 de 2011 y Ley 412 de 1997 y sus normas modificatorias o de cualquiera de las conductas delictivas contempladas por las convenciones o tratados de lucha contra la corrupción suscritos y ratificados por Colombia.

En caso de que la entidad decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad contratante tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar.

Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley.

La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento.

#### CAPÍTULO IV

#### Modificaciones al Código Penal Colombiano, Ley 599 de 2000

Artículo 9°. El artículo 68A del Código Penal, Ley 599 de 2000, quedará así:

**Artículo 68A. Exclusión de los beneficios y subrogados penales.** No se concederán la suspensión condicional de la ejecución de la pena; la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; ni habrá lugar a ningún otro beneficio, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso dentro de los cinco (5) años anteriores.

Tampoco tendrán rebaja de penas, prisión domiciliaria, libertad condicional, ni ningún otro beneficio, judicial o administrativo quienes hayan sido condenados por delitos dolosos contra la Administración Pública, así no tengan antecedentes judiciales, así se sometan a colaboración con la justicia y que cumplan al menos las 4/5 partes de la pena; delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; delitos contra la libertad, integridad y formación sexual; estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado; captación masiva y habitual de dineros; utilización indebida de información privilegiada; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; soborno transnacional; violencia intrafamiliar; hurto calificado; extorsión; homicidio agravado contemplado en el numeral 6 del artículo 104; lesiones causadas con agentes químicos, ácido y/o sustancias similares; violación ilícita de comunicaciones; violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial; trata de personas; apología al genocidio; lesiones personales por pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro; desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan; receptación; instigación a delinquir; empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos; fabricación, importación, tráfico, posesión o uso de armas químicas, biológicas y nucleares; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y otras infracciones; espionaje; rebelión; y desplazamiento forzado; usurpación de inmuebles, falsificación de moneda nacional o extranjera; exportación o importación ficticia; evasión fiscal; negativa de reintegro; contrabando agravado; contrabando de hidrocarburos y sus derivados; ayuda e instigación al empleo, producción y transferencia de minas antipersonal.

Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará respecto de la sustitución de la detención

preventiva y de la sustitución de la ejecución de la pena en los eventos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004.

#### CAPÍTULO V

#### Vigencia

Artículo 10. La presente ley rige a partir de su publicación y deroga todas las normas que le sean contrarias.

De la Honorable Cámara de Representantes,

De la Honorable Cámara de Representantes,



HERIBERTO SANABRIA ASTUDILLO  
Representante a la Cámara

#### TEXTO APROBADO EN LA COMISIÓN PRIMERA DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES EN PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 017 DE 2017 CÁMARA

por medio del cual se crea la lista “Ser Pillo No Paga” vinculada a la Comisión de Delitos contra la Administración Pública y el patrimonio público como medida de castigo para los responsables por hechos de corrupción y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

#### CAPÍTULO I

#### Disposiciones generales

Artículo 1°. *Objeto.* La presente Ley tiene por objeto la creación de la Lista “**SER PILLO NO PAGA**” vinculada a la comisión de delitos contra la Administración Pública y el Patrimonio Público.

Artículo 2°. *Naturaleza.* La lista “**SER PILLO NO PAGA**” será el mecanismo de castigo financiero severo y ejemplar para las personas naturales y jurídicas que cometan delitos contra la Administración Pública y el Patrimonio Público.

Artículo 3°. *Principios.* La presente ley estará regida por los principios del Debido Proceso definido en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, Legalidad, artículo 6° Ley 599 de 2000, Transparencia y Publicidad consagradas en la Ley 80 de 1993 y los principios generales del derecho.

Artículo 4°. *Competencia.* Facúltase a la Superintendencia Financiera de Colombia para crear la lista “**SER PILLO NO PAGA**”, además de administrar, actualizar y regular la información contenida en la lista “**SER PILLO NO PAGA**”.

Parágrafo 1°. La Superintendencia Financiera de Colombia garantizará el buen funcionamiento de la lista “SER PILLO NO PAGA”, para lo cual podrá articular con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) o la entidad (es) u organismo (s) que considere, para ajustar un Sistema de Administración de información ya existente o implementar uno nuevo.

La creación e implementación de un nuevo sistema de administración de información o el acondicionamiento o ajuste a uno ya existente para el funcionamiento de la lista “SER PILLO NO PAGA” por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, cumplirá lo consagrado en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”.

## CAPÍTULO II

### Del funcionamiento y procedimiento de la lista “Ser Pillo No Paga”

Artículo 5°. Confirmado el fallo condenatorio mediante sentencia judicial debidamente ejecutoriada, por los delitos consagrados en la Ley Penal, Ley 1474 de 2011, Ley 1778 de 2016 y sus normas modificatorias y concordantes así como lo dispuesto en la convenciones o tratados suscritos y ratificados por Colombia en materia de lucha contra la corrupción que atenten contra la Administración Pública y el Patrimonio Público, impuesto a las personas naturales, representantes legales de personas jurídicas definidas en el artículo 633 del Código Civil y en aquellas personas que recaiga responsabilidad administrativa como miembros de junta directiva, socios, contratistas y empleados, deberá el juez natural de oficio remitir copia de los fallos a la Superintendencia Financiera de Colombia.

Artículo 6°. La Superintendencia Financiera de Colombia notificará a todas las entidades sujetas de su control y vigilancia, la inclusión en la lista “SER PILLO NO PAGA” de las personas naturales, representantes legales de las personas jurídicas, además de los mencionados en el artículo anterior por los delitos contra la Administración Pública y Patrimonio Público.

Parágrafo 1°. Las personas jurídicas que hayan sido utilizadas como medio o instrumento por parte de los representantes legales o personas en las que recaiga responsabilidad administrativa tales como; miembros de junta directiva, socios, contratistas y empleados para cometer delitos contra la Administración Pública y el Patrimonio Público serán incluidas en la lista “SER PILLO NO PAGA”.

Artículo 7°. Las personas naturales y jurídicas incluidas en la lista “SER PILLO NO PAGA” tendrán un bloqueo en todos los productos financieros pasivos que tengan a su nombre en las entidades que son sujeto de vigilancia y control por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, por lo cual no podrán realizar

ningún tipo de transacción en el sector durante el tiempo que dure la pena impuesta. Además de las sanciones estipuladas en el Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades.

La permanencia de las personas naturales en la lista “SER PILLO NO PAGA” será igual al tiempo de la pena o condena contenida en el fallo.

Para el caso de las personas jurídicas, la permanencia en la lista “SER PILLO NO PAGA” será igual al tiempo de la pena impuesta al representante legal o personas en las que recaiga responsabilidad administrativa tales como; miembros de junta directiva, socios, contratistas y empleados.

En caso de que existan varias condenas en diferentes personas de las enunciadas en el inciso anterior, el tiempo de permanencia en la lista será equivalente a la pena más alta impuesta sobre ellos.

## CAPÍTULO III

### Modificaciones a la Ley 80 de 1993

Artículo 8°. Modifíquese el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, el cual quedará así:

**De la caducidad y sus efectos.** La caducidad es la estipulación en virtud de la cual si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencia que puede conducir a su paralización, la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre.

**Parágrafo 1°.** Adicional a lo dispuesto en el presente artículo, será causal de caducidad cuando se logre establecer mediante sentencia judicial que el contratista incurrió en actos de corrupción de los contemplados en la Ley 412 de 1997, Ley 1474 de 2011 y sus normas modificatorias o de cualquiera de las conductas delictivas contempladas por las convenciones o tratados de lucha contra la corrupción suscritos y ratificados por Colombia.

También se podrá decretar la caducidad cuando mediante sentencia judicial se logre establecer que el contratista responsable de cumplir con el objeto contractual, logró la adjudicación y suscripción del contrato mediante la comisión de delitos contra la administración pública, el patrimonio económico del Estado y actos de corrupción, contemplados en la Ley 599 de 2000, 1474 de 2011 y Ley 412 de 1997 y sus normas modificatorias o de cualquiera de las conductas delictivas contempladas por las convenciones o tratados de lucha contra la corrupción suscritos y ratificados por Colombia.

En caso de que la entidad decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que la

entidad contratante tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar.

Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley.

La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento.

Artículo 9°. El artículo 68A del Código Penal, Ley 599 de 2000, quedará así:

**Artículo 68A. Exclusión de los beneficios y subrogados penales.** No se concederán la suspensión condicional de la ejecución de la pena; la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; ni habrá lugar a ningún otro beneficio, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso dentro de los cinco (5) años anteriores.

Tampoco tendrán rebaja de penas, prisión domiciliaria, libertad condicional, ni ningún otro beneficio, judicial o administrativo quienes hayan sido condenados por delitos dolosos contra la Administración Pública, así se sometan a colaboración con la justicia y que cumplan al menos las 4/5 partes de la pena; delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; delitos contra la libertad, integridad y formación sexual; estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado; captación masiva y habitual de dineros; utilización indebida de información privilegiada; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; soborno transnacional; violencia intrafamiliar; hurto calificado; extorsión; homicidio agravado contemplado en el numeral 6 del artículo 104; lesiones causadas con agentes químicos, ácido y/o sustancias similares; violación ilícita de comunicaciones; violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial; trata de personas; apología al genocidio; lesiones personales por pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro; desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan; receptación; instigación a delinquir; empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos; fabricación, importación, tráfico, posesión o uso de armas químicas, biológicas y nucleares; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y otras infracciones; espionaje; rebelión; y desplazamiento forzado; usurpación de inmuebles, falsificación de moneda nacional o extranjera; exportación o importación ficticia;

evasión fiscal; negativa de reintegro; contrabando agravado; contrabando de hidrocarburos y sus derivados; ayuda e instigación al empleo, producción y transferencia de minas antipersonal.

Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará respecto de la sustitución de la detención preventiva y de la sustitución de la ejecución de la pena en los eventos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004.

## CAPÍTULO V

### Vigencia

Artículo 10. La presente ley rige a partir de su publicación y deroga todas las normas que le sean contrarias.

En los anteriores términos fue aprobado con modificaciones el presente proyecto de ley según consta en Acta número 16 de diciembre 05 de 2017. Anunciado entre otras fechas el 4 de diciembre de 2017 según consta en Acta número 15 de la misma fecha.

En los anteriores términos fue aprobado con modificaciones el presente Proyecto de Ley según consta en Acta No. 16 de diciembre 05 de 2017. Anunciado entre otras fechas el 04 de diciembre de 2017 según consta en Acta No. 15 de la misma fecha.

HERIBERTO SANABRIA ASTUDILLO  
Coordinador Ponente

CARLOS ARTURO CORREA MOJICA  
Presidente

AMPARO Y CALBERON BERDOMO  
Secretaría Comisión Primera Constitucional

\* \* \*

## INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE EN PLENARIAS DEL SENADO Y DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 206 DE 2018 SENADO, 222 DE 2018 CÁMARA

por la cual se modifica la Ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones en materia de *Derecho de Autor y Derechos Conexos*”.

Honorable Representante

CARLOS ARTURO CORREA MOJICA

Presidente Comisión Primera

Cámara de Representantes

Respetado Presidente:

En cumplimiento de la honrosa designación que nos hiciera la Mesa Directiva, de la manera más atenta, por medio del presente escrito y dentro del término establecido para el efecto, con fundamento en el artículo 163 de la Constitución Política y los artículos 150, 153, 156 y 169, numeral 2, de la Ley 5ª de 1992, procedemos a rendir informe de ponencia para segundo debate al **Proyecto de ley número 206 de 2018 del Senado- 222 de 2018 Cámara**, “por la cual se

*modifica la Ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones en materia de derecho de autor y derechos conexos”.*

### I. ANTECEDENTES

1. El día 5 de abril de 2018, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo radicaron el presente Proyecto de ley, el cual fue publicado en la *Gaceta del Congreso* número 113 de 2018.

2. El día 17 de abril de 2018 se radicó ponencia para primer debate en la Comisión Primera del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, la cual fue publicada en las *Gacetas del Congreso* número 146 de 2018 y 147 de 2018 respectivamente.

3. El día 18 de abril de 2018, fue aprobada con la mayoría de votos exigidos en sesiones conjuntas de la Comisión Primera del Senado de la República y de la Cámara de Representantes; por lo tanto, continúa su trámite en las plenarias del Senado de la República y la Cámara de Representantes.

### II. CONTEXTO DEL PROYECTO DE LEY

La creatividad y la innovación son dos conceptos que definen a la sociedad moderna. Es difícil pensar en una sociedad que se mueva a un ritmo tan vertiginoso como la actual sin incluir dentro de la reflexión estas dos características propias del ser humano. En nuestra cotidianidad es natural que convivamos con creaciones de todo tipo y que nos permiten realizar una gran variedad de actividades, desde poder cumplir a cabalidad con nuestros cometidos laborales y académicos, pasando por el disfrute de espacios de diversión, hasta la generación de empleo y el impulso de la economía nacional.

Pero todo esto que damos por sentado es el fruto de un esfuerzo creativo. Pensemos, por ejemplo, en el caso del programa de computador o software que permite realizar textos o animaciones con total pulcritud, o en el caso de una novela que llega todos los confines del mundo. Estas creaciones, de diversos tipos y con aportes de una o varias personas reclaman un marco normativo que fomente y recompense el esfuerzo realizado. Bajo estas premisas surge el derecho de autor, como un instrumento que permite amparar jurídicamente a quienes con su creatividad e ingenio nos brindan estos bienes tan preciados.

Como reconocimiento a esta realidad, nuestra Carta Política, particularmente en el artículo 61, se refiere al derecho de autor, al disponer que “el Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley”. De similar manera, la legislación colombiana reconoce al derecho de autor como un derecho de propiedad. Así, por ejemplo, el Código Civil en su artículo 671 señala que “*las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores*”, estableciendo además que dicho tipo de propiedad se regirá por una normativa especial. Estas disposiciones tienen un desarrollo en el ámbito comunitario y nacional en la Decisión Andina 351 de 1993 y en la Leyes 23

de 1982, 44 de 1993, 1403 de 2010, 1493 de 2011, 1835 de 2017, entre otras.

En el plano internacional Colombia hace parte de diversos instrumentos internacionales que consagran los pilares de la normatividad autoral colombiana. Entre ellos están el Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas, ratificado por la Ley 33 de 1987; la Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, ratificado por la Ley 48 de 1975; y los Tratados de la OMPI sobre Derecho de Autor e Interpretación o Ejecución y Fonogramas, ratificados por las Leyes 565 de 2000 y 545 de 1999, respectivamente.

No se puede perder de vista que una protección adecuada genera incentivos que contribuyen a fomentar la creatividad; tampoco se puede desconocer que, como se ha mencionado en algunos estudios, “*las industrias del derecho de autor constituyen un fenómeno económico de relevancia que moviliza cuantiosos recursos, genera riqueza, empleo y divisas para el país*”<sup>1</sup>. A modo de ilustración, podemos observar que, en el informe del año 2017 de la Cuenta Satélite de Cultura del Departamento Administrativo Nacional, se menciona que el campo cultural ha tenido, en términos generales, un aumento constante de 5,8% entre los años 2005 y 2016.

En consonancia con lo anterior, el “Reporte sobre la información en materia de Propiedad Intelectual en Colombia”, realizado entre la Dirección Nacional de Derecho de Autor, la Superintendencia de Industria y Comercio, el Departamento Nacional de Planeación, y el Instituto Colombiano Agropecuario; con el apoyo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, evidencia el aumento constante que ha presentado el registro de obras que se lleva en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, pasando de 13.107 registros emitidos en el año 2000, a la cifra de 71.875 registros en el año 2016.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que, en los Tratados de Libre Comercio celebrados por Colombia con los Estados Unidos de América, la Unión Europea, entre otros, se han realizado acuerdos en asuntos relativos al derecho de autor y los derechos conexos.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, en el año 2012 se presentó el Proyecto de ley número 201 de 2012, Senado; 197 de 2012, Cámara. Dicha propuesta normativa se materializó con la promulgación de la Ley 1520 de 2012. Sin embargo,

<sup>1</sup> Estudio titulado: La contribución económica de las industrias del derecho de autor y los derechos conexos en Colombia, elaborado por Alberto Castañeda Cordy, Rafael Cubillos López, Armando Sarmiento López y Jaime Vallecilla Gordillo. Encargado por la Organización Mundial de la propiedad Intelectual -OMPI- y la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

mediante la Sentencia C-011 de 2013 la honorable Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de esta norma argumentando la existencia de vicios de forma durante el trámite de expedición.

Debido a las observaciones de los sectores interesados durante el trámite de la Ley 1520, el gobierno inició en el 2013 un diálogo para escuchar las preocupaciones de los ciudadanos en relación con la norma propuesta. Dicho proceso se adelantó a través de socialización del proyecto con sectores como periodistas, titulares, academia, sector de la tecnología y desarrolladores, y bibliotecas y personas con discapacidad.

Luego de dichas reuniones los diferentes actores remitieron por escrito sus comentarios y sugerencias. A partir de ese momento, las entidades involucradas procedieron a evaluar dichos insumos, realizaron las modificaciones que consideraron pertinentes y emitieron respuesta a cada uno de los comentarios allegados. Posteriormente, el 8 de agosto de 2016 se publicó el nuevo Proyecto de ley para conocimiento y consideración de la sociedad civil en general. Dicha iniciativa estuvo publicada en los sitios web de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para comentarios hasta el 22 de septiembre de 2016. Como resultado de dicho proceso se recibieron 18 comentarios, los cuales fueron analizados de manera interinstitucional, acogiéndose varias de las propuestas presentadas.

Posteriormente se realizaron nuevas jornadas de socialización entre el 29 de septiembre y 2 de octubre de 2017. Producto de todo el proceso de socialización surgió el texto del Proyecto de ley 146 de 2017 Senado, que se puso a consideración del honorable Congreso de la República, proyecto que se retiró habida cuenta de las observaciones que se presentaron en el trámite legislativo derivado de algunas observaciones direccionadas a que probablemente presentaba contenidos que harían pensar que su trámite fuera estatutario.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Gobierno, con el ánimo de atender las inquietudes presentadas consideró prudente presentar un nuevo texto, en donde se excluyen aquellas materias que generaron las citadas inquietudes, zanjando de manera definitiva el carácter ordinario de su trámite.

Así las cosas, el Proyecto de ley número 206 de 2018 Senado, 222 de 2018 Cámara *“por la cual se modifica la Ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones en materia de Derecho de Autor y Derechos Conexos”*, es presentado como respuesta a todas las inquietudes que vienen comentándose. Siendo importante aclarar que del mismo se ha excluido ciertas disposiciones, como por ejemplo, las relativas a definiciones que se encontraban en otras disposiciones normativas vigentes, y aquellas relacionadas con cuota de pantalla. Así mismo, se han realizado importantes cambios y avances en asuntos de gran relevancia como lo son las limitaciones y excepciones, lo cual es evidencia del objetivo de

propender por conservar un equilibrio adecuado entre los titulares de derecho de autor o conexos y el interés de la comunidad en acceder a obras y otros objetos protegidos por la disciplina autoral.

Es importante resaltar que el presente Proyecto de ley no tiene como finalidad la discusión de la responsabilidad civil de los Proveedores de Servicios de Internet, por lo que no debe ser confundido de ninguna forma con el Proyecto de ley número 241 de 2011, también conocido como “Ley Lleras”.

### III. AUDIENCIA PÚBLICA

#### 1. Realización de Audiencia Pública

El día 16 de abril de 2018 se llevó a cabo audiencia pública sobre el Proyecto de ley. Esta fue convocada por la Comisión Primera del Senado de la República, y también comunicada a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. En la misma, se contó con una nutrida participación tanto del Congreso de la República (7 Congresistas), como de la sociedad civil (37 personas inscritas y 35 intervenciones) y del Gobierno nacional (Ministerio del Interior, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Dirección Nacional de Derecho de Autor).

Por parte del Congreso de la República, además de los ponentes, participaron el Representante a la Cámara Telésforo Pedraza y los Senadores Germán Varón, Carlos Alberto Baena, Alexander López y Claudia López. Esta última, además, intervino en la sesión exponiendo sus preocupaciones, las cuales fueron respondidas por la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

De igual manera, la audiencia atrajo a un gran número de sectores interesados en manifestar sus argumentos, entre los cuales se encontraron actores, compositores, escritores, organizaciones sociales defensoras del uso de tecnologías en el derecho de autor, expertos en contenidos digitales, abogados expertos en derechos de autor, miembros de la academia, delegados de las bibliotecas, sociedades de personas en condición de discapacidad y sociedades de gestión colectiva, entre otras.

Por parte del Gobierno nacional intervino el Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ambos en calidad de autores de la iniciativa y con el propósito de aclarar algunas dudas presentadas en las intervenciones.

#### 2. Desarrollo de la Audiencia:

Las asociaciones de autores, compositores, intérpretes, productores de fonogramas, profesores de universidades públicas, representantes de organismos intergubernamentales, estudiantes de universidades y académicos, expresaron la pertinencia y el apoyo al Proyecto de ley, señalando que este proyecto garantiza el respeto de los derechos morales y patrimoniales de autor y los derechos conexos, y resaltaron que la inclusión de las excepciones y limitaciones representa un

equilibrio entre el derecho de autor y los intereses de los usuarios.

La Cámara Colombiana del Libro celebró el retiro del literal f del artículo 14 del anterior Proyecto de ley 146 de 2017 Senado, por cuanto no puede considerarse como una excepción el uso indiscriminado de fotocopias y PDF en la educación a distancia y en esa medida apoyó el texto actual del Proyecto de ley número 206 de 2018 Senado, 222 de 2018 Cámara.

El Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Organismo Intergubernamental de la Unesco) centró su intervención en las ventajas del Proyecto de ley, resaltando las disposiciones dirigidas a permitir el uso de obras huérfanas, apoyando la inclusión de este tema y resaltando que el mismo se encuentra ajustado a la realidad colombiana.

El escritor y compositor Gilberto Triana manifestó su apoyo al Proyecto de ley y solicitó la supresión del parágrafo del artículo 35 del Proyecto de ley, por considerar que el mismo al limitar la responsabilidad penal de aquellos organismos sin ánimo de lucro, afecta el legítimo derecho de los autores a autorizar o prohibir el uso de sus obras.

Varios compositores asociados a la Sociedad de Autores y Compositores Sayco, intervinieron en apoyo al Proyecto de ley, que a través de su articulado reconoce los derechos patrimoniales de los autores y compositores, permitiéndoles vivir de su trabajo intelectual. Así mismo, algunos de ellos se opusieron al establecimiento de cláusulas abiertas tipo “fair use”, por considerar que sus derechos deben ser respetados y que las limitaciones deben ser claras y precisas para garantizar seguridad jurídica.

Para finalizar intervino la Dirección Nacional de Derecho de Autor señalando la importancia del artículo 27 de Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce al derecho de autor como un derecho humano. Resaltó que el derecho de autor cuenta con los mecanismos necesarios para garantizar una protección adecuada y efectiva de los derechos de autores y titulares, al tiempo que atiende los intereses del público en general de acceso a la información, la cultura y la educación, aclarando el alcance de la protección que otorga la normativa autoral. De igual manera, destacó que, con este Proyecto de ley, los autores y titulares colombianos podrán gozar de los estándares internacionales de protección y por lo tanto, competir en igualdad de condiciones en los países, en donde sus obras o prestaciones son utilizadas.

Por otro lado algunos representantes de fundaciones, investigadores, periodistas y entidades de apoyo al uso libre de conocimiento presentaron su preferencia por que el Proyecto de ley contemple una clausula abierta de excepciones y limitaciones, posición que fue controvertida por

los autores y compositores del derecho, quienes señalaron que la misma no solo es ajena a nuestro sistema jurídico, sino que es inconveniente para los intereses de los titulares y los usuarios, al invertir la carga de la prueba. En ese sentido se pronunció Juan Fernando Córdoba, Decano de la facultad de Derecho de la Universidad de la Sabana, quien señaló que en su tesis de doctorado había analizado este tema, encontrando que la cláusula abierta no representaba un beneficio para la educación y por el contrario se constituía en un riesgo para el derecho de los autores.

La doctora Graciela Sarmiento, experta en derecho de autor y profesora universitaria manifestó que en el proyecto se integran oportunamente normas como parte de compromisos internacionales, así como incluye limitaciones de carácter taxativo, sin embargo, manifiesta que se corren riesgos al incorporar una clausula abierta, debido a que el sistema jurisdiccional no es compatible.

Otras intervenciones del Proyecto de ley estuvieron dirigidas a no concentrar en la Dirección Nacional de Derecho de Autor la actualización de limitaciones y excepciones, dominio público amplio y al uso libre de obras que se encuentran en espacios públicos. Mientras otras intervenciones estaban dirigidas a reconocer la labor de la Dirección Nacional de Derecho de Autor como el ente rector y técnico en la materia y por lo tanto se resaltó su competencia, capacidad e imparcialidad.

Al finalizar el debate, el Senador Hernán Andrade y la Senadora Claudia López realizaron algunas preguntas dirigidas a aclarar inquietudes que habían quedado de las intervenciones.

En este sentido el senador Hernán Andrade llamó la atención sobre la solicitud de la Coordinadora Nacional de Organismos de Limitados Visuales (CONALVI), quien solicita la eliminación de los artículos 28, 29 y 30 del Proyecto de ley. El Gobierno, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, señaló que revisaría el tema.

Por su parte, la senadora Claudia López solicitó la inclusión de una excepción dirigida al uso de reseñas y críticas en el marco de su actividad de información, ante lo cual el Gobierno, a través de la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA), le aclaró que el derecho de autor permite realizar ese tipo de actividades sin que sea necesario la consagración de una excepción al respecto y además, enunció que en el régimen de limitaciones y excepciones actual hay varias que favorecen el ejercicio de la actividad periodística, las cuales permanecen vigentes y no son objeto de modificación en virtud de este Proyecto de ley. De igual manera la Senadora López, resaltó la importancia de revisar las excepciones establecidas para las bibliotecas y pregunto por las disposiciones que actualmente benefician a dichas instituciones. Al respecto, la Directora

General de la DNDA, explicó las disposiciones que se encuentran en el Proyecto de ley en favor de este sector, aclarando así este punto.

#### **IV. DEBATE SESIÓN CONJUNTA COMISIÓN PRIMERA DE SENADO Y COMISIÓN PRIMERA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES**

El 18 de abril de 2018 se llevó a cabo el debate del Proyecto de ley en sesión conjunta de la Comisión Primera del Senado de la República y la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Los coordinadores ponentes, Hernán Andrade Serrano y Berner Zambrano Eraso, explicaron el objeto del proyecto de reforma e insistieron en la necesidad de aprobar el mismo.

En el curso del debate y tras la explicación que sobre el particular realizó el Ministro del Interior, doctor Guillermo Rivera, se dejó claro que el Proyecto de ley no pretende regular materia de contenido estatutario por cuanto si bien a los autores se les reconocen unos derechos de carácter moral y otros de carácter patrimonial, siendo los primeros los considerados como derechos fundamentales, como lo reconoce la Corte Constitucional en la Sentencia C-155 de 1998, en el presente Proyecto de ley, se hacen modificaciones y adiciones a la Ley 23 de 1982, pero el articulado propuesto en ninguna de sus partes hace referencia a los derechos morales, que son los que por su naturaleza fundamental podrían implicar, si se regulara su núcleo fundamental, recurrir al trámite estatutario. En consecuencia, con esto quedó claro y así lo decidieron las comisiones, que el trámite que se daría al proyecto es de ley ordinaria.

En atención a diversas inquietudes expuestas por algunos senadores y representantes, y en atención al contenido técnico del proyecto, se abrió un espacio de sesión informal para que la Directora Nacional de Derecho de Autor, doctora Carolina Romero Romero, explicara el objeto y contenido del proyecto.

En el debate se votaron de manera negativa los impedimentos presentados por los Senadores Carlos Baena, Alfredo Rangel, Paloma Valencia y Claudia López; así como los presentados por los representantes Rodrigo Lara, Clara Rojas, Jaime Buenahora y Samuel Hoyos.

Luego de ello se votó y se aprobó con la mayoría de votos exigidos, tanto en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes como en la Comisión Primera del Senado de República, el informe de ponencia, el articulado del Proyecto de ley, excepto aquellos sobre los cuales se habían presentado proposiciones (4, 13, 16 y 17). Posteriormente se votó y aprobó con la mayoría de votos exigidos, en ambas comisiones, los artículos 4º y 16 sin las proposiciones presentadas inicialmente, ya que estas se dejaron como constancia; así como con las proposiciones propuestas, los artículos 13 y 17.

## **EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

### **V. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY**

#### **1. Objetivo:**

El objetivo del presente proyecto normativo es modificar la Ley 23 de 1982 así como establecer otras disposiciones en materia de Derecho de Autor y Derechos Conexos. Con lo anterior se pretende actualizar el marco normativo existente en Colombia en la materia, para que los creadores, es decir, los autores, así como los artistas intérpretes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión puedan ejercer de forma eficaz sus derechos, acorde con los estándares internacionales establecidos en diferentes tratados y convenios.

Para lograr dicho cometido el Proyecto de ley se articula en varios ejes temáticos, los cuales son: (i) actualización de las disposiciones generales en materia de derechos de autor y conexos; (ii) regulación del régimen correspondiente al uso de medidas tecnológicas de protección de obras y prestaciones protegidas por derechos de autor y conexos; (iii) régimen de excepciones y limitaciones al derecho de autor; (iv) régimen normativo para las obras huérfanas; (v) disposiciones en materia de observancia de los derechos de autor y conexos.

#### **2. Actualización de las disposiciones generales en materia de derechos de autor y conexos:**

Los artículos que hacen parte de este apartado hacen referencia a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos.

Al respecto, como primera reflexión, debe tenerse en cuenta que en materia de derechos de autor y derechos conexos la legislación colombiana actual y la Decisión Andina 351 de 1993 confieren una serie de derechos que buscan proteger, por una parte, los derechos intrínsecos entre el autor y su creación, y por otra los derechos relacionados con la facultad de decidir sobre todos aquellos actos de utilización de una obra o prestación protegida por derechos de autor y conexos: estamos hablando de los derechos morales y patrimoniales de autor.

En esta parte se busca hacer unas precisiones en el campo de los derechos patrimoniales de autor, para hacer más clara nuestra legislación, especialmente en materia de las nuevas formas de explotación de las obras.

Artículo 1º: con la adición de un párrafo al artículo 10 de la Ley 23 de 1982 se pretende establecer una presunción de titularidad, para efectos procesales, a favor de la persona bajo cuyo nombre, seudónimo o su equivalente se haya divulgado la obra. Lo anterior permite que la persona beneficiada con la presunción pueda acudir ante los jueces de la República o las autoridades administrativas con facultades jurisdiccionales sin necesidad de acreditar dicha titularidad. Cabe

mencionar que en este caso se trata de una figura que no admite prueba en contrario.

De igual forma, dispone la norma que se presumirá, salvo prueba en contrario, que la obra se encuentra protegida, es decir, que no se requerirá acreditar que la obra se encuentra en el dominio privado.

Artículo 2º: mediante la modificación del artículo 11 de la Ley 23 de 1982, este artículo permite que los titulares de derechos de fonogramas tengan en el país derechos sobre las fijaciones que se lanzan en el país y simultáneamente en otros. La disposición incluye dentro de los objetos protegidos los fonogramas publicados por primera vez en el país, incluidos aquellos publicados en Colombia dentro de los 30 días siguientes a la publicación inicial en otro país.

Artículo 3º: mediante este artículo se actualizan los derechos patrimoniales que consagra la Ley 23 de 1982, al definir de manera precisa las características patrimoniales de los derechos de reproducción, comunicación al público, distribución, importación, alquiler, traducción o transformación de obras. Las modificaciones realizadas en este artículo no van en contra de lo consagrado actualmente en la Ley 23 de 1982; por el contrario, lo que pretenden es hacer que estas hagan referencia explícita a las modalidades de uso de obras que son propias del entorno digital. Para ello, el artículo menciona, entre otras la reproducción temporal y el almacenamiento electrónico en el caso de la reproducción, así como de la puesta a disposición del público, en el caso del derecho de comunicación pública.

Dentro de los ejemplos de estas dos formas mencionadas anteriormente están el almacenamiento en caché que hacen los computadores y la generación de copias de obras en discos duros o memorias. De la misma forma y a modo de ilustración, en el caso de la puesta a disposición, están comprendidos aquellos casos en los cuales el titular de derechos de autor autoriza que su obra pueda ser accedida por el público a través de un sitio web.

Finalmente, en el párrafo se incluye la mención de la figura del agotamiento del derecho. Este puede definirse como aquel momento en el cual el titular de derechos de autor pierde la capacidad de decidir sobre la propiedad del soporte que contiene su creación, una vez esta se transfiere por primera vez. El agotamiento aplica para el caso de las sucesivas reventas, lo que significa que el titular de derecho de autor de un libro no puede oponerse a que los ejemplares vendidos por él o con su autorización, sean revendidos por quienes los han adquirido. En el caso de los alquileres y préstamos en general, debe precisarse que no son cobijados por la mencionada figura.

Artículo 4º: Este artículo hace mención al término de duración del derecho de autor, en especial, cuando el titular es una persona jurídica.

En primera medida, el artículo 4 establece que el tiempo de la protección es de 70 años a favor del titular (Persona jurídica), los cuales se cuentan desde que la obra fue publicada. En este sentido, se establece que, si dentro de los 50 años posteriores al año de adquisición de la obra esta no es publicada, esos 70 años se cuentan desde el momento en el cual la obra es creada.

Respecto al término de duración, se debe mencionar que la Decisión Andina 351 establece un término de protección mínimo de 50 años contados a partir de la realización, divulgación o publicación de la obra, encontrándose facultados los estados miembros de la comunidad y en el caso particular, el Estado Colombiano, para establecer un término de protección mayor, como se hace en este caso, con el propósito de salvaguardar en mejor medida a los titulares nacionales, cuando comercialicen sus productos en mercados foráneos, ya que la protección que recibirán en otros países estará atada a la reciprocidad, y por ende, a los estándares que se fijen en la ley colombiana.

Artículo 5º: mediante este artículo, se pretende modificar la Ley 23 de 1982 en el sentido de establecer unas definiciones importantes en el campo de los derechos conexos, como lo son la radiodifusión, la comunicación al público de una interpretación o ejecución fijada en un fonograma o de un fonograma, y la comunicación al público de una interpretación fijada en obras y grabaciones audiovisuales.

Artículo 6º: con esta redacción se pretende modificar el artículo 165 de la Ley 23 de 1982. Se pretende que exista mayor claridad en la distinción entre el ejercicio del derecho de autor y de los derechos conexos: Estos derechos, si bien comparten una misma naturaleza, protegen objetos diferentes, siendo la obra en el caso del derecho de autor, y las interpretaciones, ejecuciones, fonogramas y emisiones en el caso de los derechos conexos. En este sentido el artículo comentado menciona que el hecho de contar con la autorización para utilizar la obra, no faculta el uso de la interpretación, ejecución, fonograma o emisión de radiodifusión.

A modo de ejemplo, si una persona desea reproducir un fonograma, en el cual se encuentran incluidas obras e interpretaciones musicales, deberá obtener el permiso por parte del autor, los artistas intérpretes y productores. Si el interesado obtiene el permiso del titular del derecho de autor, ello no lo exime de obtener las autorizaciones de los titulares de derechos conexos. De igual forma, si obtiene la autorización de los artistas intérpretes y el productor de fonogramas, tal situación no lo exime de obtener la autorización del titular de derechos de las composiciones musicales.

Artículo 7º: Con este artículo se busca hacer más claro lo que establece a la fecha el artículo 166 de la Ley 23 de 1982.

Cabe mencionar que el artículo 166 hace referencia a los derechos que tienen los artistas intérpretes o ejecutantes, es decir aquellas personas que hacen una ejecución o una interpretación, como son los casos de los actores y las actrices, los intérpretes y ejecutantes musicales. Dichas personas, en virtud de su labor artística, adquieren derechos sobre su interpretación o ejecución, el artículo se refiere a los derechos patrimoniales de fijación, reproducción, comunicación al público, radiodifusión, puesta a disposición, distribución y alquiler.

Al igual que en el artículo 3° aquí se precisa que el agotamiento del derecho aplica para las sucesivas reventas, con lo cual, una vez se venda la copia de una interpretación o ejecución fijada en fonograma, el artista interprete o ejecutante no puede controlar las reventas de la misma.

Artículo 8°: este artículo al modificar el artículo 172 de la Ley 23 de 1982 pretende, al igual que con los artículos referidos a los derechos de autor (Art 3° del proyecto) y derechos de los artistas intérpretes (art. 7°); hacer claridad respecto de los derechos conferidos a los productores de fonogramas, con especial mención al entorno digital.

En este artículo también se trata la figura del agotamiento del derecho en el caso de las sucesivas reventas, como en el caso de los autores y los artistas intérpretes, aclarando también que esta figura no agota ni afecta el derecho exclusivo de autorizar o prohibir el alquiler comercial y préstamo público de los ejemplares vendidos

Artículo 9°: Acorde con este artículo se presumirá, salvo prueba en contrario, que las personas bajo cuyo nombre o seudónimo o marca u otra designación, se hubiere divulgado la interpretación o ejecución o el fonograma, serán titulares de los derechos conexos. También se presumirá, salvo prueba en contrario, que la interpretación, ejecución o el fonograma se encuentran protegidos.

Artículo 10: esta disposición pretende que las personas naturales o jurídicas, a las que en virtud de acto o contrato se les transfirieron derechos patrimoniales de autor o conexos, sean consideradas como titulares de derechos ante cualquier jurisdicción.

Artículo 11: En este artículo se amplía el término de protección de los derechos conexos, señalándose que cuando el titular es una persona jurídica, la protección será de 70 años desde la primera publicación autorizada o emisión de radiodifusión. En caso de que la interpretación o fonograma no sea publicada durante los 50 años siguientes a su realización, el término de protección será de 70 años, contados desde que la interpretación o ejecución fue realizada.

Cabe mencionar que, en el caso de los derechos conexos, el Convenio de Roma establece que el término de protección será de mínimo 20 años

desde que se realiza la fijación, interpretación o emisión, bien sea de la interpretación, fonograma o emisión de radiodifusión; pudiéndose establecer un término mayor. Así mismo, la Decisión Andina 351 de 1993 establece que el término de protección es de mínimo 50 años. En este caso, el Proyecto de ley pretende establecer un término superior, lo cual es permitido por los instrumentos mencionados y se encuentra acorde con los estándares internacionales, otorgando de esta forma una protección más adecuada a los titulares nacionales, tanto al interior del país como en el exterior, ya que la protección dispensada por los demás países, atendiendo al principio de reciprocidad, no será mayor a la finada en nuestra ley interna.

3) Regulación del régimen correspondiente al uso de medidas tecnológicas de protección de obras y prestaciones protegidas por derechos de autor y conexos.

Las medidas tecnológicas de protección pueden definirse como *“toda técnica, dispositivo o componente que, en su funcionamiento normal, esté destinado a impedir o restringir actos referidos a obras o prestaciones protegidas que no cuenten con la autorización del titular de los derechos de autor o de un derecho vecino al derecho de autor sobre una obra, una interpretación, un fonograma, un videograma o un programa”* (Gaubiac Yves; Medidas Tecnológicas e Interoperabilidad, en el derecho de autor y los derechos vecinos, 2007). Dichas medidas tienen como finalidad facilitar el control que se tiene sobre la difusión de las obras y prestaciones protegidas por derechos de autor y conexos.

Cabe mencionar que el Proyecto de ley menciona que la responsabilidad civil o penal en la que se pueda incurrir por la elusión de las medidas es independiente de aquella que se deriva de la infracción al derecho de autor.

Otro aspecto importante a tener en cuenta en materia de medidas tecnológicas de protección es que las mismas son mencionadas en los tratados de la OMPI sobre Derecho de Autor e Interpretación o Ejecución y Fonogramas, haciendo referencia al deber que tienen los estados parte de esos tratados de establecer una protección jurídica en la materia.

En este orden de ideas es pertinente mencionar que Colombia ha adquirido compromisos para salvaguardar las medidas tecnológicas efectivas tanto de acceso como de uso. De acuerdo con el Tratado de la OMPI sobre derecho de Autor (Ley 565 de 2000) y el Tratado de la OMPI sobre interpretación, ejecución y fonogramas (Ley 545 de 1999), las partes contratantes, como lo es Colombia, deben proporcionar una protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra la acción de eludir medidas tecnológicas utilizadas para restringir actos que no estén autorizados por los titulares o permitidos por la

Ley. Esto, de acuerdo con la OMPI, organismo administrador de dichos Tratados, involucra el acceso a las obras y los usos de las mismas.

En el proyecto también se establece regulación respecto de la información sobre la gestión de los derechos, entendida aquella como la información que identifica la obra, interpretación o ejecución o fonograma; al autor de la obra, al artista intérprete o ejecutante de la interpretación o ejecución, o al productor del fonograma; o al titular de cualquier derecho sobre la obra, interpretación o ejecución o fonograma; o información sobre los términos y condiciones de utilización de las obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas; o cualquier número o código que represente dicha información, cuando cualquiera de estos elementos de información estén adjuntos a un ejemplar de la obra, interpretación o ejecución o fonograma o figuren en relación con la comunicación o puesta a disposición al público de una obra, interpretación o ejecución o fonograma. Los tratados de la OMPI sobre Derecho de Autor e Interpretación o Ejecución y Fonogramas también hacen referencia al deber de establecer las medidas jurídicas correspondientes para proteger la información relacionada con la gestión de los derechos.

Al respecto, la legislación colombiana ha tratado las medidas tecnológicas de protección y la información sobre la gestión de los derechos a través del establecimiento de conductas que son sancionadas por la ley penal, particularmente, en el artículo 272 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal), resultando necesario, establecer también una responsabilidad en el campo civil.

Artículo 12: En este artículo se definen las medidas tecnológicas de protección, la información destinada a la gestión y se establecen los actos que atentan contra estas, y que generan, por tanto, una responsabilidad civil.

Finalmente, el artículo en cuestión, establece que, en materia civil, son aplicables las medidas cautelares que establece el Código General del Proceso.

Artículo 13: en este artículo se mencionan aquellos casos en los cuales es posible eludir dichas medidas de forma lícita.

Si bien estas medidas son independientes del derecho de autor, el establecimiento de estas condiciona el acceso y uso de la obra, siendo necesario, consagrar algunas situaciones que permitan eludir las medidas que impiden el uso, en atención a unos fines y bajo unas condiciones muy específicas.

En términos generales, estas limitaciones están orientadas a ciertas situaciones en las cuales existe un interés que hace comprensible la elusión, como es el caso de las actividades que permiten controlar el acceso a contenidos inapropiados por parte de menores de edad, la realización de investigaciones judiciales, la realización de actividades de hackeo ético, actividades de investigación académica

o el garantizar el ejercicio de limitaciones y excepciones al derecho de autor.

Así mismo, se precisa que las medidas tecnológicas adoptadas para restringir usos no autorizados que protegen cualquier derecho de autor o cualquier derecho conexo podrán ser eludidas cuando el uso de una obra, interpretación o ejecución, fonograma o emisión, este amparado en una limitación o excepción establecida en la ley, salvo aquella consagrada en el artículo 44 de la Ley 23 de 1982.

Artículo 14: Aquí se menciona que las disposiciones de los artículos 1 y 13 del Proyecto de ley son aplicables a obras y prestaciones de derechos de autor y conexos creadas con anterioridad a la promulgación de la ley que no hayan pasado al dominio público.

Artículo 15: En este artículo se menciona que corresponde a quien incorpore una medida tecnológica para controlar el acceso o los usos no autorizados de las obras, interpretaciones o ejecuciones, fonogramas o emisiones de los organismos de radiodifusión la obligación de informar sobre su existencia y alcance. Dicha información debe darse conforme a la Ley 1480 de 2011, conocida como el Estatuto del Consumidor.

#### **4. Régimen de excepciones y limitaciones al derecho de autor**

Las limitaciones y excepciones al derecho de autor son una serie de situaciones especiales en las cuales una persona puede hacer un uso de una obra, interpretación, ejecución, fonograma o emisión, que se encuentra dentro del término de protección del derecho de autor o de los derechos conexos, sin la necesidad de obtener una autorización previa y expresa de parte de los respectivos titulares. Dichas excepciones, de acuerdo con nuestro sistema jurídico, solamente pueden ser fijadas por medio de una Ley de la República y deben interpretarse de manera restrictiva.

Para el establecimiento de unas limitaciones o excepción debe tenerse en cuenta la regla de los tres pasos. En este punto, es necesario traer a colación el Convenio de Berna, en el cual se menciona que, para el establecimiento de limitaciones o excepciones se deben tener en cuenta tres requisitos fundamentales los cuales son: (i) que se trate de un caso especial; (ii) que no afecte la normal explotación de la obra y; (iii) que no afecte de forma injustificada al autor o titular de derechos de autor. Esta regla de los tres pasos es replicada por los artículos 15 de la Convención de Roma, 13 del ADPIC, 16 del Tratado de la OMPI sobre derecho de autor, 10 del Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas, y el 21 de la Decisión Andina 351 de 1993.

Debe destacarse que, en nuestro sistema jurídico, tanto la Decisión Andina 351 de 1993, como la Ley 23 de 1982, establecen una serie de limitaciones y excepciones al derecho de autor. En el caso de la Decisión Andina, en su artículo

22, establece un listado de 11 limitaciones y excepciones; mientras que la Ley 23 de 1982 dedica el capítulo III (artículos 31 a 44), a regular limitaciones y excepciones al derecho de autor, y el artículo 178 a establecer limitaciones y excepciones a los derechos conexos. Acorde con estas disposiciones, la amplia gama de limitaciones y excepciones se encuentra conformada en la actualidad, entre otras, por aquellas que permiten la copia privada; la copia de seguridad, en el caso del software; la fotografía y en general, la captura, de las fachadas de edificios y obras situadas de forma permanente en el espacio público, la cita de obras publicadas, la reproducción por medios reprográficos para la enseñanza y realización de exámenes, la ejecución o representación de obras en instituciones de enseñanza, la reproducción por bibliotecas o archivos, la reproducción de informaciones relativas a acontecimientos de actualidad, la realización de grabaciones efímeras por organismos de radiodifusión, la reproducción en el curso de procesos judiciales, legislativos y administrativos, el uso en el domicilio privado sin ánimo de lucro.

Lo anterior evidencia que en Colombia existe un amplio catálogo de limitaciones y excepciones en materia de derecho de autor; no obstante, con el fin de conservar el equilibrio entre los titulares y los usuarios, en el proyecto se propone adicionar unas nuevas limitaciones y excepciones, algunas aplicables en el entorno físico y otras en el digital.

Artículo 16º: Mediante este artículo se pretende añadir una serie de limitaciones al derecho de autor.

La primera de ellas se refiere a la reproducción temporal, esta se considera como una limitación y excepción al derecho de autor siempre que se haga en el caso de facilitar una transmisión en una red informática, a través de un intermediario o para el uso lícito de una obra, interpretación o ejecución, fonograma, o emisión fijada que no tengan por sí mismos una significación económica independiente; la reproducción temporal en forma electrónica incluye, los procesos tecnológicos que sean necesarios en la operación ordinaria de computadores, dispositivos digitales o de internet. En la práctica, dicha situación se puede ver en el caso del almacenamiento temporal que hacen los ordenadores en la memoria RAM de la obra para facilitar el uso de una obra o prestación protegida por derechos de autor y conexos. Esta limitación puede verse en otras legislaciones del mundo, como es el caso de la Directiva Europea 2001/29; o en Chile, mediante la Ley Nro. 17.336 de 1970 y sus reformas.

En los literales b) y c) se establecen como excepciones dos situaciones en el caso de las bibliotecas, archivos y centro de documentación. La primera de ellas hace referencia al préstamo de ejemplares físicos de obras adquiridas legalmente por estas y que se haga sin ánimo de lucro. La segunda hace referencia al uso libre

de repositorios digitales de obras y prestaciones protegidas por derechos de autor y conexos que se hagan en terminales especializados, instalados en los propios locales.

La limitación contenida en el literal d) refiere a la caricatura y parodia. Al respecto, la Ley 23 actualmente establece en su artículo 15 que para la realización de estas se requiere autorización previa y expresa del titular de derechos de la obra parodiada o del autor de la misma. Con esta limitación se busca reforzar al derecho de autor como herramienta que desarrolla el ejercicio del derecho a la libre expresión, bajo la condición de que no haya riesgo de confusión entre la parodia o caricatura y la obra parodiada o caricaturizada.

En el literal e) se establece otra limitación que permite realizar la reproducción por medios reprográficos, para la enseñanza o para la realización de exámenes, por instituciones de todos los niveles educativos, en la medida justificada por el fin que se persiga, de artículos lícitamente publicados en periódicos o colecciones periódicas, breves extractos de obras lícitamente publicadas, y obras aisladas de carácter plástico, fotográfico o figurativo, a condición que tal utilización se haga conforme a los usos honrados y que la misma no sea objeto de venta u otra transacción a título oneroso, ni tenga directa o indirectamente fines de lucro, siempre que se incluya el nombre del autor y la fuente.

Artículo 17: en dicho artículo, acorde con la proposición del senador Alexander López Maya, aprobada en primer debate de Senado y Cámara, se establece el deber del Gobierno Nacional, a través de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, de convocar anualmente una audiencia pública con el fin de realizar una revisión periódica de las limitaciones y excepciones al derecho de autor y los derechos conexos, con el objetivo de determinar la necesidad y conveniencia de presentar ante el Congreso de la República un Proyecto de ley que reforme o consagre limitaciones y excepciones al derecho de autor.

##### **5. Régimen normativo para las obras huérfanas**

En el caso de las obras huérfanas, existen una serie de consideraciones que deben analizarse para determinar si es posible o no el uso de aquellas. En este tipo de situaciones debe estudiarse la posibilidad de usar las mismas, toda vez que se trata de obras cuyo término de protección está vigente y respecto de las cuales no es posible contactar al titular o a alguno de los titulares de derechos patrimoniales sobre las mismas.

Artículo 18: este artículo define el concepto de obra huérfana, entendiendo aquella como la obra o fonograma protegida por derecho de autor o por los derechos conexos, que se publica o transmite por radiodifusión en el país, en la cual no se identifica a los titulares o, en el caso de identificarse, no se puede establecer contacto con ellos para que

se autorice el uso de la misma. La imposibilidad de contacto se configura después de realizar una búsqueda diligente, conforme al artículo 21.

Artículo 19: en dicho artículo se menciona que, en caso de no identificarse a los titulares, o en el caso de identificarse y no establecer contacto con todos ellos, la obra se podrá utilizar, en la medida que se haya autorizado el uso por parte de los titulares que si se pudieron contactar. Todo ello, previo a la realización de una búsqueda diligente.

Artículo 20: esta disposición menciona los beneficiarios que pueden hacer uso de las obras huérfanas. Dentro de estos figuran entidades como bibliotecas, archivos, museos, centros de enseñanza, organismos de conservación del patrimonio cinematográfico y sonoro, entre otros.

Artículo 21: aquí se regula el método de realización de la búsqueda diligente, para lo cual se menciona entre otros, los pasos que deben tenerse en cuenta de obras publicadas en el país cuyos titulares son extranjeros, así como el deber del Ministerio del interior de reglamentar el asunto.

Artículo 22: en este texto se establece el registro de búsquedas diligentes ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, así como la información y las medidas que deben establecerse para este.

Artículo 23: el artículo hace mención a los usos que pueden hacer los beneficiarios señalados en el artículo 20 del proyecto. Dichas obras deben hacer parte de sus colecciones.

Artículo 24: el proyecto de norma señala que el titular o titulares de derechos de autor o conexos podrán cesar la condición de orfandad de la obra.

Artículo 25: en este artículo se establece que los titulares que pongan fin a la condición de obra huérfana de sus obras u otras prestaciones protegidas pueden recibir una compensación equitativa por los usos realizados mientras que la obra se consideró huérfana. Para ello, se encarga al Ministerio del Interior la reglamentación correspondiente.

Artículo 26: la disposición hace referencia a que el régimen de obras huérfanas se interpretará sin perjuicio de otro tipo de normativa tal como la propiedad industrial el derecho de la competencia, entre otros.

Artículo 27: este artículo del proyecto aclara que las disposiciones sobre obras huérfanas se aplicarán con respecto a todas las obras y todos los fonogramas a que se refiere el artículo 20 que estén protegidos por la legislación sobre derecho de autor y derechos conexos a la fecha de expedición de la presente ley, así como para las que sean creadas con posterioridad a la entrada en vigor de la ley.

## 6. Depósito Legal

Artículo 28: Mediante esta disposición se propone incluir un capítulo, con un artículo

para modificar el artículo 7° de la Ley 44 de 1993, con la finalidad de actualizar el depósito legal colombiano a las nuevas circunstancias del entorno digital. Lo anterior, en virtud de los comentarios realizados por el Ministerio de Cultura – Biblioteca Nacional. Se hace necesario hacer la adición del artículo, conforme se expone en el pliego de modificaciones, para dar claridad sobre la modificación del artículo 7° de la Ley 44 de 1993.

## 7. Disposiciones en materia de observancia de los derechos de autor y conexos

En este apartado, el Proyecto de ley pretende reforzar y dar claridad respecto de los aspectos legales que permiten la observancia del derecho de autor. Dicha observancia puede darse en el ámbito civil, penal, administrativo, entre otros.

Artículo 29: mediante este artículo, la ley pretende reforzar la competencia ya existente por parte de la jurisdicción ordinaria y las autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales, como es el caso de la Dirección Nacional de Derecho de autor.

Artículo 30: Con el fin de fortalecer la debida observancia al derecho de autor, el artículo en análisis faculta al juez que conozca un caso en materia de derecho de autor a pedir información que posea el presunto infractor, respecto de la cualquier persona involucrada en una infracción al derecho de autor. Con este artículo no se pretende vulnerar el derecho a no auto incriminarse, sino que pretende que el presunto infractor colabore brindando material probatorio al proceso.

Artículo 31: Con este artículo se busca que, en los procesos sobre infracciones al derecho de autor, los derechos conexos, la elusión de medidas tecnológicas o la supresión o alteración de cualquier información sobre la gestión de derechos, el juez tenga la facultad de ordenar la destrucción de los materiales e implementos que hayan sido utilizados en la fabricación o creación de dichas mercancías infractoras. En el caso de mercancías consideradas infractoras, el juez deberá ordenar su destrucción, a cargo de quien resulte condenado en el proceso, a menos que el titular de derecho consienta en que se disponga de ellas de otra forma.

Artículo 32: Con dicho texto se busca que el titular de los derechos pueda elegir el sistema que usará para la tasación de la indemnización que le pueda ser reconocida ante una vulneración. Con dicho sistema el titular en cuestión podrá elegir entre el sistema de indemnizaciones preestablecidas o dejar que el juez valore libremente el monto de los mismos.

## Artículos nuevos

Se incluyen los artículos 33, 34, 35 y 36. En el artículo 33 se modificaron algunas conductas punibles establecidas en el artículo 272 del Código Penal.

En el artículo 34 se modifica el artículo 22 de la Ley 44 de 1993, para efecto de dar claridad a las prescripciones que se establecen en relación con las liquidaciones correspondientes a los socios de las sociedades de gestión colectiva.

En el artículo 35 se contempla la posibilidad de que las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos constituyan entidades recaudadoras para efectos de gestionar los derechos que administran.

En el artículo 36. Se modifica el artículo 271 del Código Penal.

Artículo 37: Finalmente este artículo se refiere a las vigencias y derogatorias. En consonancia con lo establecido en la Decisión Andina 351 de 1993, con esta disposición se suprime la licencia de reproducción que anteriormente podía otorgar la Dirección Nacional de Derecho de Autor, la cual estaba establecida en los artículos 58 a 71 de la Ley 23 de 1982. Así mismo, para dar claridad a los procesos aplicables en materia de derecho de autor y guardar la coherencia del Código General de Proceso, se deroga el artículo 243 de la Ley 23 de 1982. En atención a los artículos nuevos que se incluirán al proyecto, este artículo pasará a ser el número 37.

### VI. PLIEGO DE MODIFICACIONES PARA SEGUNDO DEBATE DE COMISIONES CONJUNTAS DE SENADO Y CÁMARA, PROYECTO DE LEY 206 DE 2018 SENADO Y 222 DE 2018 CÁMARA

Los ponentes aprovechan el estudio del Proyecto de ley para proponer:

Texto Aprobado en las Comisiones Primeras del Senado de la República y de la Cámara de Representantes	Comentario	Texto propuesto para segundo debate en plenaria del Senado de la República y la Cámara de Representantes
<p><b>Artículo 1°.</b> Adiciónese al artículo 10 de la Ley 23 de 1982 el siguiente párrafo:</p> <p><b>Parágrafo.</b> En todo proceso relativo al derecho de autor, y ante cualquier jurisdicción se presumirá, salvo prueba en contrario, que la persona bajo cuyo nombre, seudónimo o su equivalente se haya divulgado la obra, será el titular de los derechos de autor. También se presumirá, salvo prueba en contrario, que la obra se encuentra protegida.</p>	<p>En atención a la preocupación manifestada, en la sesión conjunta de las comisiones primeras de Senado y Cámara, por la Representante a la Cámara Clara Rojas, se aclara que el artículo no hace alusión a las jurisdicciones de otros países sino a las diversas jurisdicciones dentro del territorio nacional.</p>	<p><b>Artículo 1°.</b> Adiciónese al artículo 10 de la Ley 23 de 1982 el siguiente párrafo:</p> <p><b>Parágrafo.</b> En todo proceso relativo al derecho de autor, y ante cualquier jurisdicción <u>nacional</u> se presumirá, salvo prueba en contrario, que la persona bajo cuyo nombre, seudónimo o su equivalente se haya divulgado la obra, será el titular de los derechos de autor. También se presumirá, salvo prueba en contrario, que la obra se encuentra protegida.</p>
<p><b>Artículo 11.</b> Modifíquese el artículo 2° de la Ley 44 de 1993 que modifica el artículo 29 de la Ley 23 de 1982, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 2°.</b> Los derechos consagrados a favor de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión tendrán la siguiente duración:</p> <p>a) Cuando el titular sea persona natural, la protección se dispensará durante su vida y 80 años más a partir de su muerte;</p> <p>b) Cuando el titular sea persona jurídica, el plazo de protección será de:</p> <p>1. 70 años contados a partir del final del año calendario de la primera publicación autorizada de la interpretación, ejecución o del fonograma. A falta de tal publicación autorizada dentro de los 50 años contados a partir de la realización de la interpretación, ejecución, o del fonograma, el plazo será de 70 años a partir del final del año calendario en que se realizó la interpretación o ejecución o el fonograma.</p>	<p>Atendiendo la constancia presentada en la sesión conjunta de las comisiones primeras por el Representante a la Cámara Samuel Hoyos Mejía, se aclara la fecha a partir de la cual se empieza a contar el término de 80 años a que hace alusión el literal a).</p>	<p><b>Artículo 11.</b> Modifíquese el artículo 2° de la Ley 44 de 1993 que modifica el artículo 29 de la Ley 23 de 1982, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 2°.</b> Los derechos consagrados a favor de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión tendrán la siguiente duración:</p> <p>a) Cuando el titular sea persona natural, la protección se dispensará durante su vida y 80 años más, <u>contados</u> a partir del <u>1° de enero del año siguiente</u> a de su muerte;</p> <p>b) Cuando el titular sea persona jurídica, el plazo de protección será de:</p> <p>1. 70 años contados a partir del final del año calendario de la primera publicación autorizada de la interpretación, ejecución o del fonograma. A falta de tal publicación autorizada dentro de los 50 años contados a partir de la realización de la interpretación, ejecución, o del fonograma, el plazo será de 70 años a partir del final del año calendario en que se realizó la interpretación o ejecución o el fonograma.</p>

Texto Aprobado en las Comisiones Primeras del Senado de la República y de la Cámara de Representantes	Comentario	Texto propuesto para segundo debate en plenaria del Senado de la República y la Cámara de Representantes
2. 70 años contados a partir del final del año calendario en que se haya realizado la primera emisión de radiodifusión.		2. 70 años contados a partir del final del año calendario en que se haya realizado la primera emisión de radiodifusión.
<p><b>Artículo 13. Excepciones a la responsabilidad por la elusión de las medidas tecnológicas.</b> Las excepciones a la responsabilidad consagrada en los literales a) y b) del artículo anterior son las siguientes, las cuales serán aplicadas en consonancia con los parágrafos de este artículo.</p> <p>a) Actividades de buena fe no infractoras de ingeniería inversa realizadas a la copia de un programa de computación obtenida legalmente, siempre que los elementos particulares de dicho programa no hubiesen estado a disposición inmediata de la persona involucrada en dichas actividades, con el único propósito de lograr la interoperabilidad de un programa de computación creado independientemente con otros programas;</p> <p>b) Actividades de buena fe no infractoras, realizadas por un investigador que haya obtenido legalmente una copia, interpretación o ejecución no fijada o muestra de una obra, interpretación o ejecución o fonograma, y que haya hecho un esfuerzo de buena fe por obtener autorización para realizar dichas actividades, en la medida necesaria, y con el único propósito de identificar y analizar fallas y vulnerabilidades de las tecnologías para codificar y decodificar la información;</p> <p>c) La inclusión de un componente o parte con el único fin de prevenir el acceso de menores al contenido inapropiado en línea en una tecnología, producto, servicio o dispositivo que por sí mismo sea diferente de los mencionados en el literal b) del artículo 12;</p> <p>d) Actividades de buena fe no infractoras autorizadas por el dueño de una computadora, sistema de cómputo o red de cómputo con el único fin de probar, investigar o corregir la seguridad de dicha computadora, sistema de cómputo o red de cómputo;</p> <p>e) El acceso por parte de bibliotecas, archivos o instituciones de todos los niveles educativos, sin fines de lucro, a una obra, interpretación o ejecución o fonograma a la cual no tendrían acceso de otro modo, con el único fin de tomar decisiones sobre adquisiciones.</p> <p>f) Actividades no infractoras con el único fin de identificar y deshabilitar la capacidad de realizar de manera no divulgada la recolección o difusión de datos de identificación personal que reflejen</p>	<p>A través de una proposición presentada por los Congresistas Ponentes, la cual fue aprobada positivamente por ambas comisiones, se modificó el artículo 13 para permitir en el literal g) que la revisión periódica de las excepciones que permiten la elusión de las medidas tecnológicas no esté sujeta solamente a las “Limitaciones y excepciones al derecho de autor y conexos” sino frente a cualquier uso no infractor. De igual manera, se incorporó un párrafo para aclarar que cuando se estuviera en el marco de una limitación o excepción al derecho de autor era posible eludir una medida tecnológica de protección que impide usos no autorizados.</p> <p>En sesión de trabajo convocada por los ponentes, el Senador Carlos Baena, realizó la solicitud de incluir una modificación en el párrafo que ya había sido aprobado durante la sesión de las comisiones conjuntas. Por tal motivo, se incluyen estos apartes para dar claridad sobre los casos en los cuales pueden ser eludidas las medidas tecnológicas adoptadas para restringir usos no autorizados que protegen cualquier derecho de autor o cualquier derecho conexo.</p>	<p>Artículo 13. <i>Excepciones a la responsabilidad por la elusión de las medidas tecnológicas.</i> Las excepciones a la responsabilidad consagrada en los literales a) y b) del artículo anterior son las siguientes, las cuales serán aplicadas en consonancia con los parágrafos de este artículo.</p> <p>a) Actividades de buena fe no infractoras de ingeniería inversa realizadas a la copia de un programa de computación obtenida legalmente, siempre que los elementos particulares de dicho programa no hubiesen estado a disposición inmediata de la persona involucrada en dichas actividades, con el único propósito de lograr la interoperabilidad de un programa de computación creado independientemente con otros programas;</p> <p>b) Actividades de buena fe no infractoras, realizadas por un investigador que haya obtenido legalmente una copia, interpretación o ejecución no fijada o muestra de una obra, interpretación o ejecución o fonograma, y que haya hecho un esfuerzo de buena fe por obtener autorización para realizar dichas actividades, en la medida necesaria, y con el único propósito de identificar y analizar fallas y vulnerabilidades de las tecnologías para codificar y decodificar la información;</p> <p>c) La inclusión de un componente o parte con el único fin de prevenir el acceso de menores al contenido inapropiado en línea en una tecnología, producto, servicio o dispositivo que por sí mismo sea diferente de los mencionados en el literal b) del artículo 12;</p> <p>d) Actividades de buena fe no infractoras autorizadas por el dueño de una computadora, sistema de cómputo o red de cómputo con el único fin de probar, investigar o corregir la seguridad de dicha computadora, sistema de cómputo o red de cómputo;</p> <p>e) El acceso por parte de bibliotecas, archivos o instituciones de todos los niveles educativos, sin fines de lucro, a una obra, interpretación o ejecución o fonograma a la cual no tendrían acceso de otro modo, con el único fin de tomar decisiones sobre adquisiciones;</p> <p>f) Actividades no infractoras con el único fin de identificar y deshabilitar la capacidad de realizar de manera no divulgada la recolección o difusión de datos de identificación personal que reflejen</p>

<p><b>Texto Aprobado en las Comisiones Primeras del Senado de la República y de la Cámara de Representantes</b></p>	<p><b>Comentario</b></p>	<p><b>Texto propuesto para segundo debate en plenaria del Senado de la República y la Cámara de Representantes</b></p>
<p>las actividades en línea de una persona natural, de manera que no tenga otro efecto en la capacidad de cualquier persona de obtener acceso a cualquier obra;</p> <p>g) Usos no infractores de una clase particular de obra, interpretación o ejecución, fonograma o emisión, teniendo en cuenta la existencia de evidencia sustancial de un impacto adverso real o potencial en aquellos usos no infractores.</p> <p>El Gobierno nacional a través de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor hará una revisión periódica, en intervalos de no más de tres años, para determinar la necesidad y conveniencia de emitir un concepto en que se consagren los usos no infractores que han de ser objeto de la excepción prevista en este literal. Los usos no infractores mencionados en el concepto de la Dirección Nacional de Derecho de Autor serán permanentes, pero susceptibles de revocación, si desaparece la excepción o limitación al derecho de autor o a los derechos conexos en que se fundamentó la excepción de la medida tecnológica o si hay evidencia sustancial de que la necesidad de su existencia ha desaparecido.</p> <p>Para esta revisión la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor evaluará las inquietudes que sean planteadas a través de la Subcomisión de Derecho de Autor de la Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual (CIPI), la que a través de un proceso de socialización amplio y suficiente, recogerá en un documento las inquietudes manifestadas por los beneficiarios de las limitaciones y excepciones, así como por los titulares de derechos;</p> <p>h) Usos no infractores de una obra, interpretación o ejecución, fonograma o emisión, amparados por las limitaciones y excepciones establecidas por la ley en favor de toda persona con y/o en situación de discapacidad en los términos de la Ley 1618 de 2013, que, en razón a las barreras definidas en dicha ley, no pueda acceder a las obras en los modos, medios y formatos de comunicación accesibles de su elección y adecuados a su tipo de discapacidad;</p> <p>i) La actividad legalmente autorizada de investigación, protección, seguridad de la información o inteligencia, llevada a cabo por empleados, agentes o contratistas del gobierno. Para los efectos de este numeral la seguridad de la información comprende, entre otras actividades,</p>		<p>las actividades en línea de una persona natural, de manera que no tenga otro efecto en la capacidad de cualquier persona de obtener acceso a cualquier obra;</p> <p>g) Usos no infractores de una clase particular de obra, interpretación o ejecución, fonograma o emisión, teniendo en cuenta la existencia de evidencia sustancial de un impacto adverso real o potencial en aquellos usos no infractores.</p> <p>El Gobierno nacional a través de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor hará una revisión periódica, en intervalos de no más de tres años, para determinar la necesidad y conveniencia de emitir un concepto en que se consagren los usos no infractores que han de ser objeto de la excepción prevista en este literal. Los usos no infractores mencionados en el concepto de la Dirección Nacional de Derecho de Autor serán permanentes, pero susceptibles de revocación, si desaparece la excepción o limitación al derecho de autor o a los derechos conexos en que se fundamentó la excepción de la medida tecnológica o si hay evidencia sustancial de que la necesidad de su existencia ha desaparecido.</p> <p>Para esta revisión la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor evaluará las inquietudes que sean planteadas a través de la Subcomisión de Derecho de Autor de la Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual (CIPI), la que a través de un proceso de socialización amplio y suficiente, recogerá en un documento las inquietudes manifestadas por los beneficiarios de las limitaciones y excepciones, así como por los titulares de derechos;</p> <p>h) Usos no infractores de una obra, interpretación o ejecución, fonograma o emisión, amparados por las limitaciones y excepciones establecidas por la ley en favor de toda persona con y/o en situación de discapacidad en los términos de la Ley 1618 de 2013, que, en razón a las barreras definidas en dicha ley, no pueda acceder a las obras en los modos, medios y formatos de comunicación accesibles de su elección y adecuados a su tipo de discapacidad;</p> <p>i) La actividad legalmente autorizada de investigación, protección, seguridad de la información o inteligencia, llevada a cabo por empleados, agentes o contratistas del gobierno. Para los efectos de este numeral la seguridad de la información comprende, entre otras actividades,</p>

<b>Texto Aprobado en las Comisiones Primeras del Senado de la República y de la Cámara de Representantes</b>	<b>Comentario</b>	<b>Texto propuesto para segundo debate en plenaria del Senado de la República y la Cámara de Representantes</b>
<p>pruebas de vulnerabilidad, hacking ético y análisis forense, llevadas a cabo para identificar y abordar la vulnerabilidad de una computadora, un sistema de cómputo o una red de cómputo gubernamentales.</p> <p><b>Parágrafo 1°.</b> Todas las excepciones a las conductas establecidas en el presente artículo aplican para las medidas tecnológicas efectivas que controlen el acceso a una obra, interpretación ejecución o fonograma.</p> <p><b>Parágrafo 2°.</b> A las actividades relacionadas en el artículo 12 literal b), cuando se refieran a medidas tecnológicas que controlen el acceso a una obra, interpretación, ejecución o fonograma, solo se aplicarán las excepciones establecidas en los literales a), b), c), d) del presente artículo.</p> <p><b>Parágrafo 3°.</b> A las actividades relacionadas en el artículo 12 literal b), cuando se refieran a medidas tecnológicas que protegen cualquier derecho de autor o cualquier derecho conexo al derecho de autor frente a usos no autorizados, solo se aplicará la excepción establecida en el literal a) del presente artículo.</p> <p><b>Parágrafo 4°.</b> Las medidas tecnológicas adoptadas para restringir usos no autorizados que protegen cualquier derecho de autor o cualquier derecho conexo podrán ser eludidas cuando el uso de una obra, interpretación o ejecución, fonograma o emisión, este amparado en una limitación o excepción establecida en la ley salvo aquella consagrada en el artículo 44 de la Ley 23 de 1982.</p>		<p>pruebas de vulnerabilidad, hacking ético y análisis forense, llevadas a cabo para identificar y abordar la vulnerabilidad de una computadora, un sistema de cómputo o una red de cómputo gubernamentales.</p> <p><b>Parágrafo 1°.</b> Todas las excepciones a las conductas establecidas en el presente artículo aplican para las medidas tecnológicas efectivas que controlen el acceso a una obra, interpretación ejecución o fonograma.</p> <p><b>Parágrafo 2°.</b> A las actividades relacionadas en el artículo 12 literal b), cuando se refieran a medidas tecnológicas que controlen el acceso a una obra, interpretación, ejecución o fonograma, solo se aplicarán las excepciones establecidas en los literales a), b), c), d) del presente artículo.</p> <p><b>Parágrafo 3°.</b> A las actividades relacionadas en el artículo 12 literal b), cuando se refieran a medidas tecnológicas que protegen cualquier derecho de autor o cualquier derecho conexo al derecho de autor frente a usos no autorizados, solo se aplicará la excepción establecida en el literal a) del presente artículo.</p> <p><b>Parágrafo 4°.</b> Las medidas tecnológicas adoptadas para restringir usos no autorizados que protegen cualquier derecho de autor o cualquier derecho conexo podrán ser eludidas cuando el uso de una obra, interpretación o ejecución, fonograma o emisión, este amparado en una limitación o excepción establecida en la ley <u>o cuando se trate de la reproducción, por cualquier medio, de una obra literaria o científica, ordenada u obtenida por el interesado en un solo ejemplar para su uso privado y sin fines de lucro. En virtud de este parágrafo, las medidas tecnológicas no podrán ser eludidas en el ejercicio de la limitación y excepción consagrada en el artículo 44 de la Ley 23 de 1982.</u></p>
<p><b>Artículo 16. Limitaciones y excepciones al derecho de autor y los derechos conexos.</b> Sin perjuicio de las limitaciones y excepciones establecidas en la Decisión Andina 351 de 1993, en la Ley 23 de 1982 y en la Ley 1680 de 2013, se crean las siguientes:</p> <p>La reproducción temporal en forma electrónica de una obra, interpretación o ejecución, fonograma o emisión fijada, que sea transitoria o accesoria, que forme parte integrante y esencial de un proceso tecnológico y cuya única finalidad consista en facilitar una transmisión en una red informática entre terceras partes</p>	<p>Con la colaboración de la Senadora Doris Vega, quien para este efecto adelantó una reunión con los sectores interesados, se redactaron las modificaciones propuestas al artículo en la forma en que aquí se señala, con el propósito de aclarar los casos de aplicación y el alcance de las limitaciones y excepciones que se establecen en los literales b) y c) del artículo 16 del proyecto.</p> <p>En particular, se precisó que el préstamo público que se encontraría exceptuado es el que se realiza sin ánimo de lucro. Así mismo queda claro que esta excepción abarca el préstamo de copias o ejemplares en cualquier soporte material que las contengan, como resultado</p>	<p><b>Artículo 16. Limitaciones y excepciones al derecho de autor y los derechos conexos.</b> Sin perjuicio de las limitaciones y excepciones establecidas en la Decisión Andina 351 de 1993, en la Ley 23 de 1982 y en la Ley 1680 de 2013, se crean las siguientes:</p> <p>La reproducción temporal en forma electrónica de una obra, interpretación o ejecución, fonograma o emisión fijada, que sea transitoria o accesoria, que forme parte integrante y esencial de un proceso tecnológico y cuya única finalidad consista en facilitar una transmisión en una red informática entre terceras partes</p>

<p><b>Texto Aprobado en las Comisiones Primeras del Senado de la República y de la Cámara de Representantes</b></p>	<p><b>Comentario</b></p>	<p><b>Texto propuesto para segundo debate en plenaria del Senado de la República y la Cámara de Representantes</b></p>
<p>por un intermediario, o una utilización lícita de una obra, interpretación o ejecución, fonograma, o emisión fijada que no tengan por sí mismos una significación económica independiente.</p> <p>Para los fines del presente literal, se entiende que la reproducción temporal en forma electrónica incluye, los procesos tecnológicos que sean necesarios en la operación ordinaria de computadores, dispositivos digitales o de internet, siempre y cuando se cumplan con los requisitos mencionados en el párrafo anterior.</p> <p>b) El préstamo por una biblioteca, archivo o centro de documentación, cuyas actividades no tengan directa ni indirectamente fines de lucro, de copias o ejemplares de obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, fonogramas y emisiones fijadas, siempre que figuren en las colecciones permanentes de esta y hubiesen sido lícitamente adquiridas.</p> <p>c) La puesta a disposición por parte de bibliotecas, archivos o centros de documentación, a través de terminales especializados instalados en sus propios locales o en función de los servicios de extensión de las bibliotecas públicas de la Ley 1379 de 2010, para fines de investigación o estudio personal de sus usuarios, de obras, fonogramas, grabaciones audiovisuales y emisiones fijadas, lícitamente adquiridas y que no estén sujetas a condiciones de adquisición o licencia.</p> <p>d) Se permitirá la transformación de obras literarias y artísticas divulgadas, siempre que se realice con fines de parodia y caricatura, y no implique un riesgo de confusión con la obra originaria.</p> <p>e) Se permitirá la reproducción por medios reprográficos para la enseñanza o para la realización de exámenes por instituciones de todos los niveles educativos, en la medida justificada por el fin que se persiga, de artículos lícitamente publicados en periódicos o colecciones periódicas, breves extractos de obras lícitamente publicadas, y obras aisladas de carácter plástico, fotográfico o figurativo, a condición que tal utilización se haga conforme a los usos honrados y que la misma no sea objeto de venta u otra transacción a título oneroso, ni tenga directa o indirectamente fines de lucro. Lo anterior siempre que se incluya el nombre del autor y la fuente.</p>	<p>de un acto de reproducción. Se aclara que el préstamo público establecido en el literal b) en consonancia con los tratados multilaterales en la materia y la Decisión Andina 351 de 1993, no abarca obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, fonogramas y emisiones que no estén fijadas en soportes tangibles.</p> <p>Durante la sesión de trabajo convocada por la Senadora Doris Vega, el sector bibliotecario solicito excluir del literal c) la puesta a disposición realizada por parte de bibliotecas, archivos o centros de documentación en función de los servicios de extensión de las bibliotecas públicas de la Ley 1379 de 2010. Lo cual fue aprobado por la Senadora Doris Vega.</p>	<p>por un intermediario, o una utilización lícita de una obra, interpretación o ejecución, fonograma, o emisión fijada que no tengan por sí mismos una significación económica independiente.</p> <p>Para los fines del presente literal, se entiende que la reproducción temporal en forma electrónica incluye, los procesos tecnológicos que sean necesarios en la operación ordinaria de computadores, dispositivos digitales o de internet, siempre y cuando se cumplan con los requisitos mencionados en el párrafo anterior.</p> <p>b) El préstamo <u>sin ánimo de lucro</u>, por una biblioteca, archivo o centro de documentación, <del>cuyas actividades no tengan directa ni indirectamente fines de lucro</del> de copias o ejemplares de obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, fonogramas y emisiones fijadas, siempre que figuren en las colecciones permanentes de esta <u>o hagan parte de un programa de cooperación bibliotecaria</u> y hubiesen sido lícitamente adquiridas.</p> <p>c) La puesta a disposición por parte de bibliotecas, archivos o centros de documentación, a través de terminales especializados instalados en sus propios locales <del>o en función de los servicios de extensión de las bibliotecas públicas de la Ley 1379 de 2010</del>, para fines de investigación o estudio personal de sus usuarios, de obras, fonogramas, grabaciones audiovisuales y emisiones fijadas, lícitamente adquiridas y que no estén sujetas a condiciones de adquisición o licencia.</p> <p>d) Se permitirá la transformación de obras literarias y artísticas divulgadas, siempre que se realice con fines de parodia y caricatura, y no implique un riesgo de confusión con la obra originaria.</p> <p>e) Se permitirá la reproducción por medios reprográficos para la enseñanza o para la realización de exámenes por instituciones de todos los niveles educativos, en la medida justificada por el fin que se persiga, de artículos lícitamente publicados en periódicos o colecciones periódicas, breves extractos de obras lícitamente publicadas, y obras aisladas de carácter plástico, fotográfico o figurativo, a condición que tal utilización se haga conforme a los usos honrados y que la misma no sea objeto de venta u otra transacción a título oneroso, ni tenga directa o indirectamente fines de lucro. Lo anterior siempre que se incluya el nombre del autor y la fuente.</p>

Texto Aprobado en las Comisiones Primeras del Senado de la República y de la Cámara de Representantes	Comentario	Texto propuesto para segundo debate en plenaria del Senado de la República y la Cámara de Representantes
<p>Artículo 17. <i>Actualización de limitaciones y excepciones.</i> El Gobierno nacional, a través de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, convocará anualmente al menos una audiencia pública, con el fin de realizar una revisión periódica de las limitaciones y excepciones al derecho de autor y los derechos conexos, con el objetivo de determinar la necesidad y conveniencia de presentar ante el Congreso de la República un proyecto de ley que reforme o consagre limitaciones y excepciones al derecho de autor.</p> <p>Dicho proyecto deberá observar las reglas establecidas en los tratados internacionales ratificados por Colombia para incorporar limitaciones y excepciones al derecho de autor y los derechos conexos, y tendrá como finalidad armonizar las prerrogativas consagradas en favor de los autores y titulares, de los usuarios frente al acceso a la información, los avances tecnológicos y otros derechos fundamentales.</p> <p>El proceso de revisión periódica deberá contar con la participación activa de la Sociedad civil con la que se deberán efectuar consensos y procesos de publicidad amplia y suficiente, con el fin de generar acuerdos comunes en torno a nuevos listados que actualicen las limitaciones y excepciones a los que se refiere el artículo 16.</p>	<p>Se consideró necesario dar claridad sobre el proceso de revisión periódica de las limitaciones y excepciones a fin de precisar que no se trata de una consulta previa sino de una audiencia pública en la que se escuchará los sectores interesados. Se aclara que no se trata de reuniones regionales sino de una reunión que se realizará según la disponibilidad presupuestal de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y los recursos tecnológicos con los cuales cuenta esta entidad. De igual manera, se aclara que los resultados de la misma no son vinculantes, sin embargo, los mismos serán insumos que se utilizarán para el análisis que realizará el Gobierno nacional a través de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.</p> <p>De igual manera, es pertinente mencionar que la Ministra de Cultura, manifestó expresamente a través de una carta dirigida a los ponentes, que para el efectivo cumplimiento de los principios consignados en el artículo 209 con la distribución de funciones entre los diferentes estamentos del Gobierno, debe apuntar a conceder competencias específicas, de tal forma que se alcancen los niveles de especialización y experiencia necesarios para atender las necesidades particulares de cada sector social, económico, humano, cultural, etc. En este sentido, la especialidad en lo relativo a la política en derecho de autor, se encuentra en cabeza del Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, como entidad adscrita, mientras que el Ministerio de Cultura ha sido investido con competencias ajenas a la formulación de Política relacionadas con esta modalidad de Propiedad Intelectual. Razón por la cual el Ministerio de Cultura estima no conveniente que se le atribuya una competencia conjunta con la DNDA para la revisión periódica de limitaciones y excepciones al derecho de autor.</p> <p>En consecuencia, con lo anterior, teniendo en cuenta las proposiciones y constancias presentadas por los senadores Alexander López y Claudia López se llegó a la redacción que se propone.</p>	<p><b>Artículo 17. <i>Actualización de limitaciones y excepciones.</i></b> El Gobierno nacional, a través de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, convocará anualmente a una audiencia pública con el fin de realizar una revisión periódica de las limitaciones y excepciones al derecho de autor y los derechos conexos, con el objetivo de determinar la necesidad y conveniencia de presentar ante el Congreso de la República un proyecto de ley que reforme, elimine o consagre limitaciones y excepciones al derecho de autor.</p> <p>Dicho proyecto deberá observar las reglas establecidas en los tratados internacionales ratificados por Colombia para incorporar limitaciones y excepciones al derecho de autor y a los derechos conexos, y tendrá como finalidad armonizar las prerrogativas consagradas en favor de los autores y titulares, de los usuarios frente al acceso a la información, los avances tecnológicos y otros derechos fundamentales.</p> <p>El proceso de revisión periódica deberá contar con la participación de la sociedad civil y titulares derechos de autor y derechos conexos, con quienes se podrán generar acuerdos comunes en torno a la modificación de las limitaciones y excepciones.</p> <p><u>Así mismo la Dirección Nacional de Derecho de Autor facilitará, cuando a ello hubiere lugar, espacios de diálogo con las entidades del Estado que considere necesarias, para evaluar las limitaciones y excepciones al derecho de autor y los derechos conexos.</u></p>
<p><b>Artículo 28.</b> El editor, el productor de obras audiovisuales, el productor fonográfico y videgrabador, establecidos en el país, de toda obra, fonograma o videograma que hayan sido divulgadas y circulen en Colombia, deberá cumplir, dentro de los 60 días hábiles siguientes a su publicación, transmisión pública, reproducción o importación, con el depósito legal de las mismas ante las en</p>	<p>Se hace necesario realizar la modificación del artículo 28 del proyecto de ley para dar claridad sobre lo pretendido por esta disposición, que es la modificación del artículo 7° de la Ley 44 de 1993.</p>	<p><b>“Artículo 28. <i>Modifíquese el artículo 7 de la ley 44 de 1993, el cual quedará así:</i></b></p> <p><i>El editor, el productor de obras audiovisuales, el productor fonográfico y videgrabador, establecidos en el país, de toda obra, fonograma o videograma que hayan sido divulgadas y circulen en Colombia, deberá cumplir, dentro de los 60 días hábiles siguientes a su publica</i></p>

<p><b>Texto Aprobado en las Comisiones Primeras del Senado de la República y de la Cámara de Representantes</b></p>	<p><b>Comentario</b></p>	<p><b>Texto propuesto para segundo debate en plenaria del Senado de la República y la Cámara de Representantes</b></p>
<p>tidades y en la cantidad definida en la reglamentación que para el efecto expedirá el Gobierno nacional.</p> <p>El incumplimiento de las obligaciones derivadas del depósito legal será sancionado por el Ministerio de Cultura, con un salario mínimo legal diario vigente por cada día de retraso en el cumplimiento de tales obligaciones y hasta el momento en que se verifique su cumplimiento, sin superar 10 salarios mínimos mensuales por cada ejemplar que incumpla el depósito. El responsable del depósito legal que no haya cumplido esta obligación no podrá participar directamente o por interpuesta persona en procesos de contratación estatal para la adquirió de libros y dotaciones bibliotecarias, hasta tanto cumpla con dicha obligación y en su caso, hubiera pagado en su totalidad las sanciones pecuniarias impuestas. La mencionada sanción será impuesta mediante resolución motivada, la cual puede ser objeto de recursos en vía gubernativa.</p> <p>En caso de incumplimiento del depósito legal y una vez finalizado el plazo señalado, la Biblioteca Nacional de Colombia con la finalidad de preservar la memoria cultural de la Nación podrá realizar la reproducción de las obras, fonogramas o videogramas que no hayan sido depositadas por quienes tenían la obligación legal de hacerlo.</p> <p>La Biblioteca Nacional de Colombia con la finalidad de garantizar el acceso al patrimonio cultural podrá hacer la puesta a disposición para su consulta en sala, a través de terminales especializados instalados en sus propios locales de las obras, fonogramas o videogramas, tomando las medidas efectivas para impedir cualquier otro tipo de utilización que atente contra la explotación normal de la obra o cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o titular del derecho.</p> <p>El Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio del Interior – Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor y el Ministerio de Cultura – Biblioteca Nacional de Colombia, reglamentarán el depósito legal.</p>	<p>Atendiendo la constancia presentada en la sesión conjunta de las comisiones primeras por el Representante a la Cámara Samuel Hoyos Mejía, se aclara el término dentro del cual el Gobierno nacional debe reglamentar las indemnizaciones preestablecidas reguladas en el artículo 32 del proyecto.</p>	<p><i>ción, transmisión pública, reproducción o importación, con el depósito legal de las mismas ante las entidades y en la cantidad definida en la reglamentación que para el efecto expedirá el Gobierno nacional.</i></p> <p><i>El incumplimiento de las obligaciones derivadas del depósito legal será sancionado por el Ministerio de Cultura, con un salario mínimo legal diario vigente por cada día de retraso en el cumplimiento de tales obligaciones y hasta el momento en que se verifique su cumplimiento, sin superar 10 salarios mínimos mensuales por cada ejemplar que incumpla el depósito. El responsable del depósito legal que no haya cumplido esta obligación no podrá participar directamente o por interpuesta persona en procesos de contratación estatal para la adquirió de libros y dotaciones bibliotecarias, hasta tanto cumpla con dicha obligación y en su caso, hubiera pagado en su totalidad las sanciones pecuniarias impuestas. La mencionada sanción será impuesta mediante resolución motivada, la cual puede ser objeto de recursos en vía gubernativa.</i></p> <p><i>En caso de incumplimiento del depósito legal y una vez finalizado el plazo señalado, la Biblioteca Nacional de Colombia con la finalidad de preservar la memoria cultural de la Nación podrá realizar la reproducción de las obras, fonogramas o videogramas que no hayan sido depositadas por quienes tenían la obligación legal de hacerlo.</i></p> <p><i>La Biblioteca Nacional de Colombia con la finalidad de garantizar el acceso al patrimonio cultural podrá hacer la puesta a disposición para su consulta en sala, a través de terminales especializados instalados en sus propios locales de las obras, fonogramas o videogramas, tomando las medidas efectivas para impedir cualquier otro tipo de utilización que atente contra la explotación normal de la obra o cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o titular del derecho.</i></p> <p><i>El Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio del Interior – Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor y el Ministerio de Cultura – Biblioteca Nacional de Colombia, reglamentarán el depósito legal”.</i></p>
<p><b>Artículo 32. Indemnizaciones preestablecidas.</b> La indemnización que se cause como consecuencia de la infracción a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos o por las conductas descritas en la presente ley, relacionadas con las medidas tecnológicas y la información para la gestión de derechos, podrá</p>	<p>Atendiendo la constancia presentada en la sesión conjunta de las comisiones primeras por el Representante a la Cámara Samuel Hoyos Mejía, se aclara el término dentro del cual el Gobierno nacional debe reglamentar las indemnizaciones preestablecidas reguladas en el artículo 32 del proyecto.</p>	<p><b>Artículo 32. Indemnizaciones preestablecidas.</b> La indemnización que se cause como consecuencia de la infracción a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos o por las conductas descritas en la presente ley, relacionadas con las medidas tecnológicas y la información para la gestión de derechos, podrá</p>

Texto Aprobado en las Comisiones Primeras del Senado de la República y de la Cámara de Representantes	Comentario	Texto propuesto para segundo debate en plenaria del Senado de la República y la Cámara de Representantes
podrá sujetarse al sistema de indemnizaciones preestablecidas o a las reglas generales sobre prueba de la indemnización de perjuicios, a elección del titular del derecho infringido. El Gobierno nacional reglamentará la materia.		sujetarse al sistema de indemnizaciones preestablecidas o a las reglas generales sobre prueba de la indemnización de perjuicios, a elección del titular del derecho infringido. El Gobierno nacional <u>dentro de los doce (12) meses siguientes a la promulgación de esta ley</u> reglamentará la materia.
	<p>Los ponentes aprovechan para reincorporar al proyecto de ley una disposición que se encontraba en el artículo 35 de la propuesta inicial formulada por el Gobierno nacional, la cual había sido excluida por cuanto no se contaba con el concepto del Consejo Superior de Política Criminal. En tanto ha sido aportado el concepto en mención, se cumple con lo señalado en el numeral 6 del artículo 3 del Decreto 2055 de 2014, por lo que se propone su reincorporación, excepto el párrafo, está último por solicitud de Senador Roy Barreras, quien manifestó su inconformidad con este apartado de la disposición.</p> <p>Esta disposición se incluiría como artículo 33 y en consecuencia se corre la numeración de los artículos posteriores.</p>	<p><b>“Artículo 33.</b> <i>El artículo 3° de la Ley 1032 de 2006 que modificó el artículo 272 de la Ley 599 de 2000, quedará así:</i></p> <p><b>Artículo 3°. Violación a los mecanismos de protección de derecho de autor y derechos conexos, y otras defraudaciones.</b> <i>Incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, quien con el fin de lograr una ventaja comercial o ganancia económica privada y salvo las excepciones previstas en la ley:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Eluda sin autorización las medidas tecnológicas efectivas impuestas para controlar el acceso a una obra, interpretación o ejecución o fonograma protegidos, o que protege cualquier derecho de autor o cualquier derecho conexo al derecho de autor frente a usos no autorizados.</i></li> <li>2. <i>Fabrique, importe, distribuya, ofrezca al público, suministre o de otra manera comercialice dispositivos, productos o componentes, u ofrezca al público o suministre servicios que, respecto de cualquier medida tecnológica efectiva:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <i>Sean promocionados, publicitados o comercializados con el propósito de eludir dicha medida; o</i></li> <li>b) <i>Tengan un limitado propósito o uso comercialmente significativo diferente al de eludir dicha medida; o</i></li> <li>c) <i>Sean diseñados, producidos, ejecutados principalmente con el fin de permitir o facilitar la elusión de dicha medida.</i></li> </ol> </li> <li>3. <i>Suprima o altere sin autorización cualquier información sobre la gestión de derechos.</i></li> <li>4. <i>Distribuya o importe para su distribución información sobre gestión de derechos sabiendo que dicha información ha sido suprimida o alterada sin autorización.</i></li> <li>5. <i>Distribuya, importe para su distribución, emita, comunique o ponga a disposición del público copias de las obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, sabiendo que la información sobre gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización.</i></li> </ol>

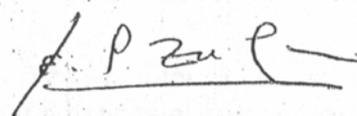
<p><b>Texto Aprobado en las Comisiones Primeras del Senado de la República y de la Cámara de Representantes</b></p>	<p><b>Comentario</b></p>	<p><b>Texto propuesto para segundo debate en plenaria del Senado de la República y la Cámara de Representantes</b></p>
		<p>6. <i>Fabrique, ensamble, modifique, importe, exporte, venda, arriende o distribuya por otro medio un dispositivo o sistema tangible o intangible, a sabiendas o con razones para saber que la función principal del dispositivo o sistema es asistir en la descodificación de una señal codificada de satélite portadora de programas codificados sin la autorización del distribuidor legítimo de dicha señal.</i></p> <p>7. <i>Recepcione o posteriormente distribuya una señal de satélite portadora de un programa que se originó como señal por satélite codificada a sabiendas que ha sido descodificada sin la autorización del distribuidor legítimo de la señal.</i></p> <p>8. <i>Presente declaraciones o informaciones destinadas directa o indirectamente al pago, recaudación, liquidación o distribución de derechos económicos de autor o derechos conexos, alterando o falseando, por cualquier medio o procedimiento, los datos necesarios para estos efectos.</i></p> <p>9. <i>Fabrique, importe, distribuya, ofrezca al público, suministre o de otra manera comercialice etiquetas falsificadas adheridas o diseñadas para ser adheridas a un fonograma, a una copia de un programa de computación, a la documentación o empaque de un programa de computación, a la copia de una película u otra obra audiovisual.</i></p> <p>10. <i>Fabrique, importe, distribuya, ofrezca al público, suministre o de otra manera comercialice documentos o empaques falsificados para un programa de computación.</i></p>
<p><b>Artículos nuevos</b></p>	<p>Por solicitud de la Senadora Paloma Valencia y previa concertación con el Gobierno nacional y las Sociedades de Gestión Colectiva, se incorporan dos disposiciones adicionales que se enumeraran como Artículos 34 y 35.</p>	<p><b>Artículo 34.</b> Modifíquese el artículo 22 de la Ley 44 de 1993, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 22. Prescriben a los 10 años, a partir de la notificación al interesado del proyecto de repartición o distribución, en favor de las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o derechos conexos, y en contra de los socios, las remuneraciones no cobradas por ellos.</p> <p>La prescripción de obras o prestaciones no identificadas será de 3 años contados a partir de la publicación del listado de obras o prestaciones no identificadas en la página web de la sociedad de gestión colectiva. En caso de litigio corresponderá a la sociedad de gestión colectiva demostrar que hizo todo lo razonable para identificar el autor o titular de la obra o prestación.</p>

Texto Aprobado en las Comisiones Primeras del Senado de la República y de la Cámara de Representantes	Comentario	Texto propuesto para segundo debate en plenaria del Senado de la República y la Cámara de Representantes
		<p><b>Artículo 35.</b> Con el objeto de garantizar el pago y el debido recaudo de las remuneraciones provenientes por conceptos de derecho de autor y derechos conexos, las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o derechos conexos podrán constituir entidades recaudadoras, en las que podrán tener asiento las sociedades reconocidas por la Dirección Nacional de Derecho de Autor. El Gobierno nacional determinará la forma y condiciones de la constitución, organización, administración y funcionamiento de las entidades recaudadoras y ejercerá sobre ellas inspección y vigilancia a través de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.</p> <p>Las entidades recaudadoras podrán negociar con los distintos usuarios, si así lo disponen sus asociados.</p>
	<p>Por solicitud de la Senadora Claudia López y de la Representante Angelica Lozano se adiciona un párrafo 2° al artículo 271 del Código Penal</p>	<p><b>Artículo 36.</b> Adiciónese un párrafo 2° al artículo 271 del Código Penal, el cual quedará así:</p> <p><u>Parágrafo 2°. La reproducción por medios informáticos de las obras contenidas en el presente artículo será punible cuando el autor lo realice con el ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, o lo haga a escala comercial.</u></p>

## VII. PROPOSICIÓN:

Con base en las anteriores consideraciones, en cumplimiento de la Constitución Política y de la Ley 5ª de 1992, presentamos ponencia favorable y en consecuencia solicitamos muy atentamente a los honorables Congresistas dar segundo debate al Proyecto de ley **número 206 de 2018 de Senado, 222 de 2018 Cámara, por la cual se modifica la Ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones en materia de Derecho de Autor y Derechos Conexos**, como se presenta en este informe de ponencia.

De los honorables Congresistas,

  
BERNER ZAMBRANO E.

### TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 206 DE 2018 SENADO, 222 DE 2018 CÁMARA

*por la cual se modifica la Ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones en materia de Derecho de Autor y Derechos Conexos.*

El Congreso de Colombia

DECRETA:

CAPÍTULO I

#### Disposiciones relativas al derecho de autor y los derechos conexos

**Artículo 1°.** Adiciónese al artículo 10 de la Ley 23 de 1982 el siguiente párrafo:

**Parágrafo.** En todo proceso relativo al derecho de autor, y ante cualquier jurisdicción nacional se presumirá, salvo prueba en contrario, que la persona bajo cuyo nombre, seudónimo o su equivalente se haya divulgado la obra, será el titular de los derechos de autor. También se presumirá, salvo prueba en contrario, que la obra se encuentra protegida.

**Artículo 2°.** Adiciónese al artículo 11 de la Ley 23 de 1982 el siguiente párrafo:

**Parágrafo.** Cuando la protección de un fonograma o una interpretación o ejecución fijada en un fonograma se otorgue en virtud del criterio de primera publicación o fijación, se considerará que dicha interpretación, ejecución o fonograma es publicada por primera vez en Colombia, cuando la publicación se realice dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación inicial en otro país.

**Artículo 3°.** Modifíquese el artículo 12 de la Ley 23 de 1982 el cual quedará así:

**Artículo 12.** El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen sobre las obras literarias y artísticas el derecho exclusivo de autorizar, o prohibir:

- La reproducción de la obra bajo cualquier manera o forma, permanente o temporal, mediante cualquier procedimiento incluyendo el almacenamiento temporal en forma electrónica;

- b) La comunicación al público de la obra por cualquier medio o procedimiento, ya sean estos alámbricos o inalámbricos, incluyendo la puesta a disposición al público, de tal forma que los miembros del público puedan tener acceso a ella desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija;
- c) La distribución pública del original y copias de sus obras, mediante la venta o a través de cualquier forma de transferencia de propiedad;
- d) La importación de copias hechas sin autorización del titular del derecho;
- e) El alquiler comercial al público del original o de los ejemplares de sus obras;
- f) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.

**Parágrafo.** El derecho a controlar la distribución de un soporte material se agota con la primera venta hecha por el titular del derecho o con su consentimiento, únicamente respecto de las sucesivas reventas, pero no agota ni afecta el derecho exclusivo de autorizar o prohibir el alquiler comercial y préstamo público de los ejemplares vendidos.

**Artículo 4°.** Modifíquese el artículo 27 de la Ley 23 de 1982, el cual quedará así:

**Artículo 27.** En todos los casos en que una obra literaria o artística tenga por titular del derecho de autor a una persona jurídica, el plazo de protección será de 70 años contados a partir del final del año calendario de la primera publicación autorizada de la obra.

Si dentro de los 50 años siguientes a la creación de la obra no ha existido publicación autorizada, el plazo de protección será de 70 años a partir del final del año calendario de la creación de la obra.

**Artículo 5°.** Adiciónese al Capítulo XII de la Ley 23 de 1982, un artículo 164 BIS el cual quedará así:

**Artículo 164 BIS.** Para los efectos de la presente ley se entiende por:

- a) **Radiodifusión.** La transmisión al público por medios inalámbricos o por satélite de los sonidos o sonidos e imágenes, o representaciones de los mismos; incluyendo la transmisión inalámbrica de señales codificadas, donde el medio de decodificación es suministrado al público por el organismo de radiodifusión o con su consentimiento; radiodifusión no incluye las transmisiones por las redes de computación o cualquier transmisión en donde tanto el lugar como el momento de recepción pueden ser seleccionados individualmente por miembros del público;
- b) **Comunicación al público de una interpretación o ejecución fijada en un fonograma o de un fonograma.** Solamente para los efectos del artículo 173 de la presente ley, es la transmisión al público, por cualquier medio que no sea la radiodifusión, de sonidos de una interpretación o ejecución o los sonidos o las representaciones de sonidos fijadas en un fonograma. Para los efectos de los derechos reconocidos a los artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas, la comunicación al público incluye también hacer que los sonidos o las representaciones de sonidos fijados en un fonograma resulten audibles al público;

**Artículo 6°.** Modifíquese el artículo 165 de la Ley 23 de 1982, el cual quedará así:

**Artículo 165.** La protección ofrecida por las normas de este capítulo no afectará en modo alguno la protección del derecho del autor sobre las obras literarias, científicas y artísticas consagradas por la presente ley. En consecuencia, ninguna de las disposiciones contenidas en él podrá interpretarse en menoscabo de esa protección.

A fin de no establecer ninguna jerarquía entre el derecho de autor, por una parte, y los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas, por otra parte, en aquellos casos en donde sea necesaria la autorización tanto del autor de una obra contenida en un fonograma como del artista intérprete o ejecutante o productor titular de los derechos del fonograma, el requerimiento de la autorización del autor no deja de existir debido a que también se requiera la autorización del artista intérprete o ejecutante o del productor de fonogramas.

Así mismo, en aquellos casos en donde sea necesaria la autorización tanto del autor de una obra contenida en un fonograma como del artista intérprete o ejecutante o del productor titular de los derechos del fonograma, el requerimiento de la autorización del artista intérprete o ejecutante o productor de fonogramas no deja de existir debido a que también se requiera la autorización del autor.

**Artículo 7°.** Modifíquese el artículo 166 de la Ley 23 de 1982, el cual quedará así:

**Artículo 166.** Los artistas intérpretes o ejecutantes, tienen respecto de sus interpretaciones o ejecuciones el derecho exclusivo de autorizar o prohibir:

- a) La radiodifusión y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas, excepto cuando la interpretación o ejecución constituya por sí misma una ejecución o interpretación radiodifundida;

- b) La fijación de sus ejecuciones o interpretaciones no fijadas;
- c) La reproducción de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas por cualquier manera o forma, permanente o temporal, mediante cualquier procedimiento incluyendo el almacenamiento temporal en forma electrónica;
- d) La distribución pública del original y copias de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonograma, mediante la venta o a través de cualquier forma de transferencia de propiedad;
- e) El alquiler comercial al público del original y de los ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, incluso después de su distribución realizada por el artista intérprete o ejecutante o con su autorización;
- f) La puesta a disposición al público de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, de tal forma que los miembros del público puedan tener acceso a ella desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.

**Parágrafo.** El derecho a controlar la distribución de un soporte material se agota con la primera venta hecha por el titular del derecho o con su consentimiento, únicamente respecto de las sucesivas reventas, pero no agota ni afecta el derecho exclusivo de autorizar o prohibir el alquiler comercial y préstamo público de los ejemplares vendidos.

**Artículo 8º.** Modifíquese el artículo 172 de la Ley 23 de 1982, el cual quedará así:

**Artículo 172.** El productor de fonogramas tiene el derecho exclusivo de autorizar o prohibir:

- a) La reproducción del fonograma por cualquier manera o forma, temporal o permanente, mediante cualquier procedimiento incluyendo el almacenamiento temporal en forma electrónica;
- b) La distribución pública del original y copias de sus fonogramas, mediante la venta o a través de cualquier forma de transferencia de propiedad;
- c) La importación de copias del fonograma;
- d) El alquiler comercial al público del original y de los ejemplares de sus fonogramas incluso después de su distribución realizada por ellos mismos o con su autorización;
- e) La puesta a disposición al público de sus fonogramas, de tal forma que los miembros del público puedan tener acceso a ellos desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.

**Parágrafo.** El derecho a controlar la distribución de un soporte material se agota con la primera venta hecha por el titular del derecho

o con su consentimiento, únicamente respecto de las sucesivas reventas, pero no agota ni afecta el derecho exclusivo de autorizar o prohibir el alquiler comercial y préstamo público de los ejemplares vendidos.

**Artículo 9º.** Adiciónese al artículo 175 de la Ley 23 de 1982 el siguiente parágrafo:

**Parágrafo.** En todo proceso relativo a los derechos conexos, y ante cualquier jurisdicción se presumirá, salvo prueba en contrario, que las personas bajo cuyo nombre o seudónimo o marca u otra designación, se hubiere divulgado la interpretación o ejecución o el fonograma, serán titulares de los derechos conexos. También se presumirá, salvo prueba en contrario, que la interpretación, ejecución o el fonograma se encuentran protegidos.

**Artículo 10.** Adiciónese al artículo 182 de la Ley 23 de 1982 el siguiente parágrafo segundo:

**Parágrafo 2º.** Las personas naturales o jurídicas, a las que en virtud de acto o contrato se les transfirieron derechos patrimoniales de autor o conexos, serán consideradas como titulares de derechos ante cualquier jurisdicción.

**Artículo 11.** Modifíquese el artículo 2º de la Ley 44 de 1993 que modifica el artículo 29 de la Ley 23 de 1982, el cual quedará así:

**Artículo 2º.** Los derechos consagrados a favor de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión tendrán la siguiente duración:

- a) Cuando el titular sea persona natural, la protección se dispensará durante su vida y 80 años más, contados a partir del primero de enero del año siguiente a su muerte;
- b) Cuando el titular sea persona jurídica, el plazo de protección será de:
  1. 70 años contados a partir del final del año calendario de la primera publicación autorizada de la interpretación, ejecución o del fonograma. A falta de tal publicación autorizada dentro de los 50 años contados a partir de la realización de la interpretación, ejecución, o del fonograma, el plazo será de 70 años a partir del final del año calendario en que se realizó la interpretación o ejecución o el fonograma.
  2. 70 años contados a partir del final del año calendario en que se haya realizado la primera emisión de radiodifusión.

**Artículo 12. Medidas tecnológicas e información sobre gestión de derechos.** Independientemente de que concurra una infracción al derecho de autor o a los derechos conexos, incurrirá en responsabilidad civil quien realice cualquiera de las siguientes conductas:

- a) Sin autorización eluda las medidas tecnológicas efectivas impuestas para controlar el

acceso a una obra, interpretación o ejecución o fonograma protegidos, o que protegen cualquier derecho de autor o cualquier derecho conexo al derecho de autor frente a usos no autorizados;

- b) Fabrique, importe, distribuya, ofrezca al público, suministre o de otra manera comercialice dispositivos, productos o componentes, u ofrezca al público o suministre servicios que, respecto de cualquier medida tecnológica efectiva:
  1. Sean promocionados, publicitados o comercializados con el propósito de eludir dicha medida; o
  2. Tengan un limitado propósito o uso comercialmente significativo diferente al de eludir dicha medida; o
  3. Sean diseñados, producidos, ejecutados principalmente con el fin de permitir o facilitar la elusión de dicha medida;
- c) Con conocimiento de causa, o teniendo motivos razonables para saber:
  1. Suprima o altere sin autorización cualquier información sobre la gestión de derechos.
  2. Distribuya o importe para su distribución, información sobre gestión de derechos que ha sido suprimida o alterada sin autorización.
  3. Distribuya, importe para su distribución, emita, comuniqué o ponga a disposición del público copias de las obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, con información sobre gestión de derechos suprimida o alterada sin autorización.

**Parágrafo 1°.** Para los efectos de la presente ley se entenderá por medida tecnológica efectiva la tecnología, dispositivo o componente que, en el curso normal de su operación, sea apta para controlar el acceso a una obra, interpretación o ejecución o fonograma protegido, o para proteger cualquier derecho de autor o cualquier derecho conexo frente a usos no autorizados y que no pueda ser eludida accidentalmente.

**Parágrafo 2°.** Para los efectos de la presente ley se entenderá por información sobre la gestión de derechos la información que identifica la obra, interpretación o ejecución o fonograma; al autor de la obra, al artista intérprete o ejecutante de la interpretación o ejecución, o al productor del fonograma; o al titular de cualquier derecho sobre la obra, interpretación o ejecución o fonograma; o información sobre los términos y condiciones de utilización de las obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas; o cualquier número o código que represente dicha información, cuando cualquiera de estos elementos de información estén adjuntos a un ejemplar de la obra, interpretación o ejecución o fonograma o figuren en relación con la

comunicación o puesta a disposición al público de una obra, interpretación o ejecución o fonograma.

**Parágrafo 3°.** *Medidas cautelares.* En los procesos civiles que se adelanten como consecuencia de la infracción a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos, o por la realización de las actividades descritas en este artículo de la presente ley, son aplicables las medidas cautelares propias de los procesos declarativos establecidas por el Código General del Proceso.

**Artículo 13.** *Excepciones a la responsabilidad por la elusión de las medidas tecnológicas.* Las excepciones a la responsabilidad consagrada en los literales a) y b) del artículo anterior son las siguientes, las cuales serán aplicadas en consonancia con los párrafos de este artículo.

- a) Actividades de buena fe no infractoras de ingeniería inversa realizadas a la copia de un programa de computación obtenida legalmente, siempre que los elementos particulares de dicho programa no hubiesen estado a disposición inmediata de la persona involucrada en dichas actividades, con el único propósito de lograr la interoperabilidad de un programa de computación creado independientemente con otros programas;
- b) Actividades de buena fe no infractoras, realizadas por un investigador que haya obtenido legalmente una copia, interpretación o ejecución no fijada o muestra de una obra, interpretación o ejecución o fonograma, y que haya hecho un esfuerzo de buena fe por obtener autorización para realizar dichas actividades, en la medida necesaria, y con el único propósito de identificar y analizar fallas y vulnerabilidades de las tecnologías para codificar y decodificar la información;
- c) La inclusión de un componente o parte con el único fin de prevenir el acceso de menores al contenido inapropiado en línea en una tecnología, producto, servicio o dispositivo que por sí mismo sea diferente de los mencionados en el literal b) del artículo 12;
- d) Actividades de buena fe no infractoras autorizadas por el dueño de una computadora, sistema de cómputo o red de cómputo con el único fin de probar, investigar o corregir la seguridad de dicha computadora, sistema de cómputo o red de cómputo;
- e) El acceso por parte de bibliotecas, archivos o instituciones de todos los niveles educativos, sin fines de lucro, a una obra, interpretación o ejecución o fonograma a la cual no tendrían acceso de otro modo, con el único fin de tomar decisiones sobre adquisiciones;
- f) Actividades no infractoras con el único fin de identificar y deshabilitar la capacidad de realizar de manera no divulgada la recolección

o difusión de datos de identificación personal que reflejen las actividades en línea de una persona natural, de manera que no tenga otro efecto en la capacidad de cualquier persona de obtener acceso a cualquier obra;

- g) Usos no infractores de una clase particular de obra, interpretación o ejecución, fonograma o emisión, teniendo en cuenta la existencia de evidencia sustancial de un impacto adverso real o potencial en aquellos usos no infractores.

El Gobierno nacional a través de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor hará una revisión periódica, en intervalos de no más de tres años, para determinar la necesidad y conveniencia de emitir un concepto en que se consagren los usos no infractores que han de ser objeto de la excepción prevista en este literal. Los usos no infractores mencionados en el concepto de la Dirección Nacional de Derecho de Autor serán permanentes, pero susceptibles de revocación, si desaparece la excepción o limitación al derecho de autor o a los derechos conexos en que se fundamentó la excepción de la medida tecnológica o si hay evidencia sustancial de que la necesidad de su existencia ha desaparecido.

Para esta revisión la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor evaluará las inquietudes que sean planteadas a través de la Subcomisión de Derecho de Autor de la Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual (CIPI), la que a través de un proceso de socialización amplio y suficiente, recogerá en un documento las inquietudes manifestadas por los beneficiarios de las limitaciones y excepciones, así como por los titulares de derechos;

- h) Usos no infractores de una obra, interpretación o ejecución, fonograma o emisión, amparados por las limitaciones y excepciones establecidas por la ley en favor de toda persona con y/o en situación de discapacidad en los términos de la Ley 1618 de 2013, que, en razón a las barreras definidas en dicha ley, no pueda acceder a las obras en los modos, medios y formatos de comunicación accesibles de su elección y adecuados a su tipo de discapacidad;
- i) La actividad legalmente autorizada de investigación, protección, seguridad de la información o inteligencia, llevada a cabo por empleados, agentes o contratistas del gobierno. Para los efectos de este numeral la seguridad de la información comprende, entre otras actividades, pruebas de vulnerabilidad, hacking ético y análisis forense, llevadas a cabo para identificar y abordar la vulnerabilidad de una computadora, un sistema de cómputo o una red de cómputo gubernamentales.

**Parágrafo 1°.** Todas las excepciones a las conductas establecidas en el presente artículo aplican para las medidas tecnológicas efectivas que controlen el acceso a una obra, interpretación ejecución o fonograma.

**Parágrafo 2°.** A las actividades relacionadas en el artículo 12 literal b), cuando se refieran a medidas tecnológicas que controlen el acceso a una obra, interpretación, ejecución o fonograma, solo se aplicarán las excepciones establecidas en los literales a), b), c), d) del presente artículo.

**Parágrafo 3°.** A las actividades relacionadas en el artículo 12 literal b), cuando se refieran a medidas tecnológicas que protegen cualquier derecho de autor o cualquier derecho conexo al derecho de autor frente a usos no autorizados, solo se aplicará la excepción establecida en el literal a) del presente artículo.

**Parágrafo 4°.** Las medidas tecnológicas adoptadas para restringir usos no autorizados que protegen cualquier derecho de autor o cualquier derecho conexo podrán ser eludidas cuando el uso de una obra, interpretación o ejecución, fonograma o emisión, este amparado en una limitación o excepción establecida en la ley o cuando se trate de la reproducción, por cualquier medio, de una obra literaria o científica, ordenada u obtenida por el interesado en un solo ejemplar para su uso privado y sin fines de lucro. En virtud de este parágrafo, las medidas tecnológicas no podrán ser eludidas en el ejercicio de la limitación y excepción consagrada en el artículo 44 de la Ley 23 de 1982.

**Artículo 14.** Las disposiciones de los artículos 1° a 13 de la presente ley se aplicarán a todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, fonogramas y emisiones que, al momento de la entrada en vigencia de la presente ley no hayan pasado al dominio público.

**Artículo 15. *Obligación de informar.*** Quien incorpore una medida tecnológica para controlar el acceso o los usos no autorizados de las obras, interpretaciones o ejecuciones, fonogramas o emisiones de los organismos de radiodifusión está obligado a informar sobre su existencia y alcance. El alcance de esta información, así como la responsabilidad de los titulares de derechos estará enmarcada dentro de los parámetros establecidos en la Ley 1480 de 2011 “*por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones*” así como aquellas normas que la modifiquen o sustituyan.

**Artículo 16. *Limitaciones y excepciones al derecho de autor y los derechos conexos.*** Sin perjuicio de las limitaciones y excepciones establecidas en la Decisión Andina 351 de 1993, en la Ley 23 de 1982 y en la Ley 1680 de 2013, se crean las siguientes:

- a) La reproducción temporal en forma electrónica de una obra, interpretación o ejecución, fonograma o emisión fijada, que sea transitoria o accesoria, que forme parte in-

tegrante y esencial de un proceso tecnológico y cuya única finalidad consista en facilitar una transmisión en una red informática entre terceras partes por un intermediario, o una utilización lícita de una obra, interpretación o ejecución, fonograma, o emisión fijada que no tengan por sí mismos una significación económica independiente.

Para los fines del presente literal, se entiende que la reproducción temporal en forma electrónica incluye, los procesos tecnológicos que sean necesarios en la operación ordinaria de computadores, dispositivos digitales o de internet, siempre y cuando se cumplan con los requisitos mencionados en el párrafo anterior;

- b) El préstamo sin ánimo de lucro, por una biblioteca, archivo o centro de documentación de copias o ejemplares de obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, fonogramas y emisiones fijadas, siempre que figuren en las colecciones permanentes de esta o hagan parte de un programa de cooperación bibliotecaria y hubiesen sido lícitamente adquiridas;
- c) La puesta a disposición por parte de bibliotecas, archivos o centros de documentación, a través de terminales especializados instalados en sus propios locales, para fines de investigación o estudio personal de sus usuarios, de obras, fonogramas, grabaciones audiovisuales y emisiones fijadas, lícitamente adquiridas y que no estén sujetas a condiciones de adquisición o licencia;
- d) Se permitirá la transformación de obras literarias y artísticas divulgadas, siempre que se realice con fines de parodia y caricatura, y no implique un riesgo de confusión con la obra originaria;
- e) Se permitirá la reproducción por medios reprográficos para la enseñanza o para la realización de exámenes por instituciones de todos los niveles educativos, en la medida justificada por el fin que se persiga, de artículos lícitamente publicados en periódicos o colecciones periódicas, breves extractos de obras lícitamente publicadas, y obras aisladas de carácter plástico, fotográfico o figurativo, a condición que tal utilización se haga conforme a los usos honrados y que la misma no sea objeto de venta u otra transacción a título oneroso, ni tenga directa o indirectamente fines de lucro. Lo anterior siempre que se incluya el nombre del autor y la fuente.

**Artículo 17. Actualización de limitaciones y excepciones.** El Gobierno nacional, a través de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, convocará anualmente a una audiencia pública

con el fin de realizar una revisión periódica de las limitaciones y excepciones al derecho de autor y los derechos conexos, con el objetivo de determinar la necesidad y conveniencia de presentar ante el Congreso de la República un proyecto de ley que reforme, elimine o consagre limitaciones y excepciones al derecho de autor.

Dicho proyecto deberá observar las reglas establecidas en los tratados internacionales ratificados por Colombia para incorporar limitaciones y excepciones al derecho de autor y a los derechos conexos, y tendrá como finalidad armonizar las prerrogativas consagradas en favor de los autores y titulares, de los usuarios frente al acceso a la información, los avances tecnológicos y otros derechos fundamentales.

El proceso de revisión periódica deberá contar con la participación activa de la sociedad civil y titulares derechos de autor y derechos conexos, con quienes se podrán generar acuerdos comunes en torno a la modificación de las limitaciones y excepciones.

Así mismo la Dirección Nacional de Derecho de Autor facilitará, cuando a ello hubiere lugar, espacios de diálogo con las entidades del Estado que considere necesarias, para evaluar las limitaciones y excepciones al derecho de autor y los derechos conexos.

## CAPÍTULO II

### Disposiciones relativas a obras huérfanas

**Artículo 18. Obras huérfanas.** Para los efectos de esta ley se entenderá por obras huérfanas las obras o fonogramas que estén protegidas por el derecho de autor o derechos conexos y que hayan sido publicadas por primera vez en Colombia o, a falta de publicación, cuya primera radiodifusión haya tenido lugar en Colombia, en los que ninguno de los titulares de los derechos sobre dicha obra o fonograma está identificado o si, de estarlo uno o más de ellos no ha sido localizado a pesar de haber efectuado una búsqueda diligente de los mismos, debidamente registrada con arreglo al artículo 21.

**Artículo 19. Identificación de los titulares.** Si existen varios titulares de derechos sobre una misma obra o un mismo fonograma y no todos ellos han sido identificados o, a pesar de haber sido identificados, no han sido localizados tras haber efectuado una búsqueda diligente, debidamente registrada con arreglo al artículo 21, la obra o el fonograma se podrán utilizar de conformidad con la presente ley, siempre que los titulares de derechos que hayan sido identificados y localizados hayan autorizado, en relación con los derechos que ostenten.

**Artículo 20.** Personas autorizadas y ámbito de aplicación para hacer uso de obras huérfanas. Podrán hacer usos de las obras huérfanas que se encuentren en sus repositorios, las bibliotecas, centros de enseñanza y museos, accesibles al público, así como archivos, organismos de

conservación del patrimonio cinematográfico o sonoro y organismos públicos de radiodifusión, con domicilio en Colombia, con el fin de alcanzar objetivos relacionados con su misión siempre y cuando este sea de interés público, y se trate de:

- a) Obras publicadas en forma de libros, revistas especializadas, periódicos, revistas u otro material impreso que figuren en las colecciones de bibliotecas, centros de enseñanza o museos, accesibles al público, así como en las colecciones de archivos o de organismos de conservación del patrimonio cinematográfico o sonoro;
- b) Obras cinematográficas o audiovisuales y los fonogramas que figuren en las colecciones de bibliotecas, centros de enseñanza o museos, accesibles al público, así como en las colecciones de archivos o de organismos de conservación del patrimonio cinematográfico o sonoro;
- c) Obras cinematográficas o audiovisuales y los fonogramas producidos por organismos públicos de radiodifusión que figuren en sus archivos y que estén protegidas por derechos de autor o derechos conexos a los derechos de autor y que hayan sido publicadas por primera vez en el país o, a falta de publicación, cuya primera radiodifusión haya tenido lugar en Colombia.

**Parágrafo 1°.** Las obras y los fonogramas a que se hace referencia en los literales a), b) y c), que nunca hayan sido publicados ni radiodifundidos en Colombia, pero que hayan sido puestos a disposición del público por las entidades mencionadas en otros países, con el consentimiento de los titulares de derechos, siempre y cuando sea razonable suponer que los titulares de derechos no se opondrían a los usos contemplados en el artículo 23.

**Parágrafo 2°.** Las normas de este capítulo se aplicarán también a las obras y otras prestaciones protegidas que estén insertadas o incorporadas en las obras o los fonogramas a que se refieren los apartados anteriores o que formen parte integral de estos.

**Artículo 21. *Búsqueda diligente.*** A efectos de determinar si una obra o un fonograma son obras huérfanas, las entidades mencionadas en el artículo 20, efectuarán una búsqueda diligente y de buena fe por cada obra u otra prestación protegida, consultando para ello las fuentes adecuadas en función de la categoría de obra y de cada prestación protegida independientemente consideradas. La búsqueda diligente se efectuará con carácter previo al uso de la obra o del fonograma.

La búsqueda diligente se efectuará, en el lugar de la primera publicación o, a falta de publicación, de primera radiodifusión. Sin embargo, si existen

pruebas que sugieran que en otros países existe información pertinente sobre los titulares de derechos, deberá efectuarse asimismo una consulta de las fuentes de información disponibles en esos países.

En el caso a que se refiere el artículo 20, parágrafo 1°, la búsqueda diligente deberá efectuarse en el país en el que se encuentre establecida la entidad que haya puesto la obra o el fonograma a disposición del público con el consentimiento del titular de derechos.

El Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior y con la coordinación de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, reglamentará la materia indicando cuáles son las fuentes de información que resultan adecuadas para la búsqueda de autores y titulares en cada categoría de obras o fonogramas en consulta con los titulares de derechos y los usuarios, e incluirán como mínimo, la información del registro nacional de derecho de autor, así como las bases de datos de las diferentes sociedades de gestión colectiva.

**Artículo 22. *Prueba de la búsqueda diligente.*** Las entidades mencionadas en el artículo 20, inscribirán en el registro nacional de derecho de autor, administrado por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, previo a realizar los usos consagrados en el artículo 23 de la presente ley, sus búsquedas diligentes y tendrán a disposición del público en general, la siguiente información:

- a) Los resultados de las búsquedas diligentes que dichas entidades hayan efectuado y que hayan llevado a la conclusión de que una obra o un fonograma debe considerarse obra huérfana;
- b) El uso que las entidades hacen de las obras o fonogramas huérfanas, de conformidad con la presente ley;
- c) Cualquier cambio, de conformidad con el artículo 24, en la condición de obra huérfana de las obras y los fonogramas que utilizan las entidades;
- d) La información de contacto pertinente de la entidad en cuestión.

El Gobierno nacional apropiará los recursos necesarios para dicha labor y, a través del Ministerio del Interior, con la coordinación de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, reglamentará la forma de realizar el mencionado registro.

**Artículo 23. *Utilización de obras huérfanas.*** Las entidades a que se refiere el artículo 20, podrán realizar, sin autorización del autor o titular, los usos que se establecen a continuación, en relación con las obras huérfanas que figuren en sus colecciones:

- a) Puesta a disposición del público de la obra huérfana;

- b) Reproducción, a efectos de digitalización, puesta a disposición del público, indexación, catalogación, conservación o restauración.

**Parágrafo 1°.** Las entidades a que se refiere el artículo 20, podrán hacer uso de una obra huérfana con arreglo del presente artículo únicamente a fines del ejercicio de su misión de interés público, en particular la conservación y restauración de las obras y los fonogramas que figuren en su colección, y la facilitación del acceso a los mismos con fines culturales y educativos. Las entidades podrán obtener ingresos en el transcurso de dichos usos, a los efectos exclusivos de cubrir los costes derivados de la digitalización de las obras huérfanas y de su puesta a disposición del público.

**Parágrafo 2°.** Cualquier utilización de una obra huérfana por parte de las entidades a que se refiere el artículo 20, se entenderá sin perjuicio de indicar el nombre de los autores y otros titulares de derechos que sí han sido identificados.

**Artículo 24. *Fin de la condición de obra huérfana.*** Los titulares de derechos sobre una obra o un fonograma que se consideren obras huérfanas tendrán en todo momento la posibilidad de poner fin a dicha condición de obra huérfana en lo que se refiere a sus derechos.

**Artículo 25. *Compensación por uso de una obra huérfana.*** Los titulares de derechos que pongan fin a la condición de obra huérfana de sus obras u otras prestaciones protegidas recibirán una compensación equitativa por el uso que las entidades a que se refiere el artículo 20 hayan hecho de dichas obras y otras prestaciones protegidas con arreglo al artículo 23 de la presente ley. El Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, con la coordinación de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, reglamentará la materia.

**Artículo 26. *Continuación de la vigencia de otras disposiciones legales.*** Las disposiciones de este capítulo se entenderán sin perjuicio de las disposiciones relativas, en particular, a los derechos de patente, las marcas comerciales, los modelos de utilidad, los diseños industriales, la protección del patrimonio nacional, los requisitos sobre depósito legal, la legislación sobre prácticas restrictivas y competencia desleal, el secreto comercial, la seguridad, la confidencialidad, la protección de datos y el derecho a la intimidad, el acceso a los documentos públicos y el derecho de contratos, así como a las normas relativas a la libertad de prensa y la libertad de expresión en los medios de comunicación.

**Artículo 27. *Aplicación en el tiempo.*** Las disposiciones sobre obras huérfanas se aplicarán con respecto a todas las obras y todos los fonogramas a que se refiere el artículo 20 que estén protegidos por la legislación sobre derecho de autor y derechos conexos a la fecha de expedición de la presente ley, así como para las que sean creadas con posterioridad a la entrada en vigor de esta.

### CAPÍTULO III

#### Depósito legal

**Artículo 28.** Modifíquese el artículo 7° de la Ley 44 de 1993, el cual quedará así:

El editor, el productor de obras audiovisuales, el productor fonográfico y videgrabador, establecidos en el país, de toda obra, fonograma o videograma que hayan sido divulgadas y circulen en Colombia, deberá cumplir, dentro de los 60 días hábiles siguientes a su publicación, transmisión pública, reproducción o importación, con el depósito legal de las mismas ante las entidades y en la cantidad definida en la reglamentación que para el efecto expedirá el Gobierno nacional.

El incumplimiento de las obligaciones derivadas del depósito legal será sancionado por el Ministerio de Cultura, con un salario mínimo legal diario vigente por cada día de retraso en el cumplimiento de tales obligaciones y hasta el momento en que se verifique su cumplimiento, sin superar 10 salarios mínimos mensuales por cada ejemplar que incumpla el depósito. El responsable del depósito legal que no haya cumplido esta obligación no podrá participar directamente o por interpuesta persona en procesos de contratación estatal para la adquisición de libros y dotaciones bibliotecarias, hasta tanto cumpla con dicha obligación y en su caso, hubiera pagado en su totalidad las sanciones pecuniarias impuestas. La mencionada sanción será impuesta mediante resolución motivada, la cual puede ser objeto de recursos en vía gubernativa.

En caso de incumplimiento del depósito legal y una vez finalizado el plazo señalado, la Biblioteca Nacional de Colombia con la finalidad de preservar la memoria cultural de la Nación podrá realizar la reproducción de las obras, fonogramas o videogramas que no hayan sido depositadas por quienes tenían la obligación legal de hacerlo.

La Biblioteca Nacional de Colombia con la finalidad de garantizar el acceso al patrimonio cultural podrá hacer la puesta a disposición para su consulta en sala, a través de terminales especializados instalados en sus propios locales de las obras, fonogramas o videogramas, tomando las medidas efectivas para impedir cualquier otro tipo de utilización que atente contra la explotación normal de la obra o cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o titular del derecho.

El Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio del Interior – Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor y el Ministerio de Cultura – Biblioteca Nacional de Colombia, reglamentarán el depósito legal.

### CAPÍTULO IV

#### Disposiciones relativas a la observancia del derecho de autor y los derechos conexos

**Artículo 29. *Procedimiento ante la jurisdicción.*** Las cuestiones que se susciten con

motivo de la aplicación de esta ley serán resueltas por la jurisdicción ordinaria o por las autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales.

**Artículo 30. Solicitud de información.** Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 33 de la Constitución Política, las autoridades judiciales competentes para resolver los procesos de infracción en materia de derecho de autor y/o derechos conexos, estarán facultadas para ordenarle al infractor que proporcione cualquier información que posea respecto de cualquier persona involucrada en la infracción, así como de los medios o instrumentos de producción o canales de distribución utilizados para ello.

**Artículo 31. Destrucción de implementos y mercancía infractora.** En los procesos sobre infracciones al derecho de autor, los derechos conexos, la elusión de medidas tecnológicas o la supresión o alteración de cualquier información sobre la gestión de derechos, el juez estará facultado para ordenar que los materiales e implementos que hayan sido utilizados en la fabricación o creación de dichas mercancías infractoras sean destruidos, a cargo de la parte vencida y sin compensación alguna, o en circunstancias excepcionales, sin compensación alguna, se disponga su retiro de los canales comerciales.

En el caso de mercancías consideradas infractoras, el juez deberá ordenar su destrucción, a cargo de quien resulte condenado en el proceso, a menos que el titular de derecho consienta en que se disponga de ellas de otra forma. En ningún caso los jueces podrán permitir la exportación de las mercancías infractoras o permitir que tales mercancías se sometan a otros procedimientos aduaneros, salvo en circunstancias excepcionales.

**Artículo 32. Indemnizaciones preestablecidas.** La indemnización que se cause como consecuencia de la infracción a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos o por las conductas descritas en la presente ley, relacionadas con las medidas tecnológicas y la información para la gestión de derechos, podrá sujetarse al sistema de indemnizaciones preestablecidas o a las reglas generales sobre prueba de la indemnización de perjuicios, a elección del titular del derecho infringido. El Gobierno nacional dentro de los doce (12) meses siguientes a la promulgación de esta ley reglamentará la materia.

**Artículo 33.** *El artículo 3° de la Ley 1032 de 2006 que modificó el artículo 272 de la Ley 599 de 2000, quedará así:*

**Artículo 3°. Violación a los mecanismos de protección de derecho de autor y derechos conexos, y otras defraudaciones.** *Incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, quien con el fin de lograr una ventaja*

*comercial o ganancia económica privada y salvo las excepciones previstas en la ley:*

1. *Eluda sin autorización las medidas tecnológicas efectivas impuestas para controlar el acceso a una obra, interpretación o ejecución o fonograma protegidos, o que protege cualquier derecho de autor o cualquier derecho conexo al derecho de autor frente a usos no autorizados.*
2. *Fabrique, importe, distribuya, ofrezca al público, suministre o de otra manera comercialice dispositivos, productos o componentes, u ofrezca al público o suministre servicios que, respecto de cualquier medida tecnológica efectiva:*
  - a) *Sean promocionados, publicitados o comercializados con el propósito de eludir dicha medida; o*
  - b) *Tengan un limitado propósito o uso comercialmente significativo diferente al de eludir dicha medida; o*
  - c) *Sean diseñados, producidos, ejecutados principalmente con el fin de permitir o facilitar la elusión de dicha medida.*
3. *Suprima o altere sin autorización cualquier información sobre la gestión de derechos.*
4. *Distribuya o importe para su distribución información sobre gestión de derechos sabiendo que dicha información ha sido suprimida o alterada sin autorización.*
5. *Distribuya, importe para su distribución, emita, comuniqué o ponga a disposición del público copias de las obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, sabiendo que la información sobre gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización.*
6. *Fabrique, ensamble, modifique, importe, exporte, venda, arriende o distribuya por otro medio un dispositivo o sistema tangible o intangible, a sabiendas o con razones para saber que la función principal del dispositivo o sistema es asistir en la descodificación de una señal codificada de satélite portadora de programas codificados sin la autorización del distribuidor legítimo de dicha señal.*
7. *Recepcione o posteriormente distribuya una señal de satélite portadora de un programa que se originó como señal por satélite codificada a sabiendas que ha sido descodificada sin la autorización del distribuidor legítimo de la señal.*
8. *Presente declaraciones o informaciones destinadas directa o indirectamente al pago, recaudación, liquidación o distribución de derechos económicos de autor o*

*derechos conexos, alterando o falseando, por cualquier medio o procedimiento, los datos necesarios para estos efectos.*

9. *Fabrique, importe, distribuya, ofrezca al público, suministre o de otra manera comercialice etiquetas falsificadas adheridas o diseñadas para ser adheridas a un fonograma, a una copia de un programa de computación, a la documentación o empaque de un programa de computación, a la copia de una película u otra obra audiovisual.*

10. *Fabrique, importe, distribuya, ofrezca al público, suministre o de otra manera comercialice documentos o empaques falsificados para un programa de computación.*

**Artículo 34.** Modifíquese el artículo 22 de la Ley 44 de 1993, el cual quedará así:

**Artículo 22.** Prescriben a los 10 años, a partir de la notificación al interesado del proyecto de repartición o distribución, en favor de las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o derechos conexos, y en contra de los socios, las remuneraciones no cobradas por ellos.

La prescripción de obras o prestaciones no identificadas será de 3 años contados a partir de la publicación del listado de obras o prestaciones no identificadas en la página web de la sociedad de gestión colectiva. En caso de litigio corresponderá a la sociedad de gestión colectiva demostrar que hizo todo lo razonable para identificar el autor o titular de la obra o prestación.

**Artículo 35.** Con el objeto de garantizar el pago y el debido recaudo de las remuneraciones provenientes por conceptos de derecho de autor y derechos conexos, las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o derechos conexos podrán constituir entidades recaudadoras, en las que podrán tener asiento las sociedades reconocidas por la Dirección Nacional de Derecho de Autor. El Gobierno nacional determinará la forma y condiciones de la constitución, organización, administración y funcionamiento de las entidades recaudadoras y ejercerá sobre ellas inspección y vigilancia a través de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

Las entidades recaudadoras podrán negociar con los distintos usuarios, si así lo disponen sus asociados.

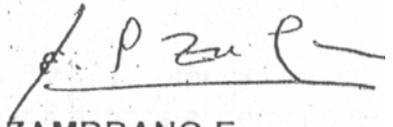
**Artículo 36.** Adiciónese un párrafo 2° al artículo 271 del Código Penal, el cual quedará así:

Parágrafo 2°. La reproducción por medios informáticos de las obras contenidas en el presente artículo será punible cuando el autor lo realice con el ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, o lo haga a escala comercial.

**Artículo 37. Vigencia.** La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga los

artículos 58 a 71 y 243 de la Ley 23 de 1982, así como las disposiciones que le sean contrarias.

De los Honorables Congresistas,



BERNER ZAMBRANO E.

**TEXTO APROBADO POR LAS COMISIONES  
PRIMERAS DEL HONORABLE SENADO  
DE LA REPÚBLICA Y DE LA HONORABLE  
CÁMARA DE REPRESENTANTES**

*por la cual se modifica la Ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones en materia de Derecho de Autor y Derechos Conexos.*

El Congreso de Colombia

DECRETA:

CAPÍTULO I

**Disposiciones relativas al derecho de autor  
y los derechos conexos**

**Artículo 1°.** Adiciónese al artículo 10 de la Ley 23 de 1982 el siguiente párrafo:

**Parágrafo.** *En todo proceso relativo al derecho de autor, y ante cualquier jurisdicción nacional se presumirá, salvo prueba en contrario, que la persona bajo cuyo nombre, seudónimo o su equivalente se haya divulgado la obra, será el titular de los derechos de autor. También se presumirá, salvo prueba en contrario, que la obra se encuentra protegida.*

**Artículo 2°.** Adiciónese al artículo 11 de la Ley 23 de 1982 el siguiente párrafo:

**Parágrafo.** *Cuando la protección de un fonograma o una interpretación o ejecución fijada en un fonograma se otorgue en virtud del criterio de primera publicación o fijación, se considerará que dicha interpretación, ejecución o fonograma es publicada por primera vez en Colombia, cuando la publicación se realice dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación inicial en otro país.*

**Artículo 3°.** Modifíquese el artículo 12 de la Ley 23 de 1982 el cual quedará así:

**Artículo 12.** *El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen sobre las obras literarias y artísticas el derecho exclusivo de autorizar, o prohibir:*

- a) *La reproducción de la obra bajo cualquier manera o forma, permanente o temporal, mediante cualquier procedimiento incluyendo el almacenamiento temporal en forma electrónica;*
- b) *La comunicación al público de la obra por cualquier medio o procedimiento, ya sean estos alámbricos o inalámbricos, incluyen-*

do la puesta a disposición al público, de tal forma que los miembros del público puedan tener acceso a ella desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija;

- c) La distribución pública del original y copias de sus obras, mediante la venta o a través de cualquier forma de transferencia de propiedad;
- d) La importación de copias hechas sin autorización del titular del derecho;
- e) El alquiler comercial al público del original o de los ejemplares de sus obras;
- f) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.

**Parágrafo.** El derecho a controlar la distribución de un soporte material se agota con la primera venta hecha por el titular del derecho o con su consentimiento, únicamente respecto de las sucesivas reventas, pero no agota ni afecta el derecho exclusivo de autorizar o prohibir el alquiler comercial y préstamo público de los ejemplares vendidos.

**Artículo 4°.** Modifíquese el artículo 27 de la Ley 23 de 1982, el cual quedará así:

**Artículo 27.** En todos los casos en que una obra literaria o artística tenga por titular del derecho de autor a una persona jurídica, el plazo de protección será de 70 años contados a partir del final del año calendario de la primera publicación autorizada de la obra.

Si dentro de los 50 años siguientes a la creación de la obra no ha existido publicación autorizada, el plazo de protección será de 70 años a partir del final del año calendario de la creación de la obra.

**Artículo 5°.** Adiciónese al Capítulo XII de la Ley 23 de 1982, un artículo 164 BIS el cual quedará así:

**Artículo 164 BIS.** Para los efectos de la presente ley se entiende por:

- a) **Radiodifusión.** La transmisión al público por medios inalámbricos o por satélite de los sonidos o sonidos e imágenes, o representaciones de los mismos; incluyendo la transmisión inalámbrica de señales codificadas, donde el medio de decodificación es suministrado al público por el organismo de radiodifusión o con su consentimiento; radiodifusión no incluye las transmisiones por las redes de computación o cualquier transmisión en donde tanto el lugar como el momento de recepción pueden ser seleccionados individualmente por miembros del público;
- b) **Comunicación al público de una interpretación o ejecución fijada en un fonograma o de un fonograma.** Solamente para los efectos del artículo 173 de la presente ley, es la transmisión al público, por cualquier

medio que no sea la radiodifusión, de sonidos de una interpretación o ejecución o los sonidos o las representaciones de sonidos fijadas en un fonograma. Para los efectos de los derechos reconocidos a los artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas, la comunicación al público incluye también hacer que los sonidos o las representaciones de sonidos fijados en un fonograma resulten audibles al público;

- c) **Comunicación al público de una interpretación fijada en obras y grabaciones audiovisuales.** La transmisión al público por cualquier medio y por cualquier procedimiento de una interpretación fijada en una obra o grabación audiovisual.

**Artículo 6°.** Modifíquese el artículo 165 de la Ley 23 de 1982, el cual quedará así:

**Artículo 165.** La protección ofrecida por las normas de este capítulo no afectará en modo alguno la protección del derecho del autor sobre las obras literarias, científicas y artísticas consagradas por la presente ley. En consecuencia, ninguna de las disposiciones contenidas en él podrá interpretarse en menoscabo de esa protección.

A fin de no establecer ninguna jerarquía entre el derecho de autor, por una parte, y los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas, por otra parte, en aquellos casos en donde sea necesaria la autorización tanto del autor de una obra contenida en un fonograma como del artista intérprete o ejecutante o productor titular de los derechos del fonograma, el requerimiento de la autorización del autor no deja de existir debido a que también se requiera la autorización del artista intérprete o ejecutante o del productor de fonogramas.

Así mismo, en aquellos casos en donde sea necesaria la autorización tanto del autor de una obra contenida en un fonograma como del artista intérprete o ejecutante o del productor titular de los derechos del fonograma, el requerimiento de la autorización del artista intérprete o ejecutante o productor de fonogramas no deja de existir debido a que también se requiera la autorización del autor.

**Artículo 7°.** Modifíquese el artículo 166 de la Ley 23 de 1982, el cual quedará así:

**Artículo 166.** Los artistas intérpretes o ejecutantes, tienen respecto de sus interpretaciones o ejecuciones el derecho exclusivo de autorizar o prohibir:

- a) La radiodifusión y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas, excepto cuando la interpretación o ejecución constituya por sí misma una ejecución o interpretación radiodifundida;

- b) *La fijación de sus ejecuciones o interpretaciones no fijadas;*
- c) *La reproducción de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas por cualquier manera o forma, permanente o temporal, mediante cualquier procedimiento incluyendo el almacenamiento temporal en forma electrónica;*
- d) *La distribución pública del original y copias de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonograma, mediante la venta o a través de cualquier forma de transferencia de propiedad;*
- e) *El alquiler comercial al público del original y de los ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, incluso después de su distribución realizada por el artista intérprete o ejecutante o con su autorización;*
- f) *La puesta a disposición al público de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, de tal forma que los miembros del público puedan tener acceso a ella desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.*

**Parágrafo.** *El derecho a controlar la distribución de un soporte material se agota con la primera venta hecha por el titular del derecho o con su consentimiento, únicamente respecto de las sucesivas reventas, pero no agota ni afecta el derecho exclusivo de autorizar o prohibir el alquiler comercial y préstamo público de los ejemplares vendidos.*

**Artículo 8º.** Modifíquese el artículo 172 de la Ley 23 de 1982, el cual quedará así:

**Artículo 172.** *El productor de fonogramas tiene el derecho exclusivo de autorizar o prohibir:*

- a) *La reproducción del fonograma por cualquier manera o forma, temporal o permanente, mediante cualquier procedimiento incluyendo el almacenamiento temporal en forma electrónica;*
- b) *La distribución pública del original y copias de sus fonogramas, mediante la venta o a través de cualquier forma de transferencia de propiedad;*
- c) *La importación de copias del fonograma;*
- d) *El alquiler comercial al público del original y de los ejemplares de sus fonogramas incluso después de su distribución realizada por ellos mismos o con su autorización;*
- e) *La puesta a disposición al público de sus fonogramas, de tal forma que los miembros del público puedan tener acceso a ellos desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.*

**Parágrafo.** *El derecho a controlar la distribución de un soporte material se agota con la primera venta hecha por el titular del derecho o con su consentimiento, únicamente respecto de las sucesivas reventas, pero no agota ni afecta el derecho exclusivo de autorizar o prohibir el alquiler comercial y préstamo público de los ejemplares vendidos.*

**Artículo 9º.** Adiciónese al artículo 175 de la Ley 23 de 1982 el siguiente parágrafo:

**Parágrafo.** *En todo proceso relativo a los derechos conexos, y ante cualquier jurisdicción se presumirá, salvo prueba en contrario, que las personas bajo cuyo nombre o seudónimo o marca u otra designación, se hubiere divulgado la interpretación o ejecución o el fonograma, serán titulares de los derechos conexos. También se presumirá, salvo prueba en contrario, que la interpretación, ejecución o el fonograma se encuentran protegidos.*

**Artículo 10.** Adiciónese al artículo 182 de la Ley 23 de 1982 el siguiente parágrafo segundo:

**Parágrafo 2º.** *Las personas naturales o jurídicas, a las que en virtud de acto o contrato se les transfirieron derechos patrimoniales de autor o conexos, serán consideradas como titulares de derechos ante cualquier jurisdicción.*

**Artículo 11.** Modifíquese el artículo 2º de la Ley 44 de 1993 que modifica el artículo 29 de la Ley 23 de 1982, el cual quedará así:

**Artículo 2º.** *Los derechos consagrados a favor de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión tendrán la siguiente duración:*

- a) *Cuando el titular sea persona natural, la protección se dispensará durante su vida y 80 años más, contados a partir del primero de enero del año siguiente a su muerte;*
- b) *Cuando el titular sea persona jurídica, el plazo de protección será de:*
  1. *70 años contados a partir del final del año calendario de la primera publicación autorizada de la interpretación, ejecución o del fonograma. A falta de tal publicación autorizada dentro de los 50 años contados a partir de la realización de la interpretación, ejecución, o del fonograma, el plazo será de 70 años a partir del final del año calendario en que se realizó la interpretación o ejecución o el fonograma.*
  2. *70 años contados a partir del final del año calendario en que se haya realizado la primera emisión de radiodifusión.*

**Artículo 12.** **Medidas tecnológicas e información sobre gestión de derechos.** Independientemente de que concurra una infracción al derecho de autor o a los derechos conexos, incurrirá en responsabilidad civil quien realice cualquiera de las siguientes conductas:

- a) Sin autorización eluda las medidas tecnológicas efectivas impuestas para controlar el acceso a una obra, interpretación o ejecución o fonograma protegidos, o que protegen cualquier derecho de autor o cualquier derecho conexo al derecho de autor frente a usos no autorizados;
- b) Fabrique, importe, distribuya, ofrezca al público, suministre o de otra manera comercialice dispositivos, productos o componentes, u ofrezca al público o suministre servicios que, respecto de cualquier medida tecnológica efectiva:
  1. Sean promocionados, publicitados o comercializados con el propósito de eludir dicha medida; o
  2. Tengan un limitado propósito o uso comercialmente significativo diferente al de eludir dicha medida; o
  3. Sean diseñados, producidos, ejecutados principalmente con el fin de permitir o facilitar la elusión de dicha medida;
- c) Con conocimiento de causa, o teniendo motivos razonables para saber:
  1. Suprima o altere sin autorización cualquier información sobre la gestión de derechos.
  2. Distribuya o importe para su distribución, información sobre gestión de derechos que ha sido suprimida o alterada sin autorización.
  3. Distribuya, importe para su distribución, emita, comunique o ponga a disposición del público copias de las obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, con información sobre gestión de derechos suprimida o alterada sin autorización.

**Parágrafo 1°.** Para los efectos de la presente ley se entenderá por medida tecnológica efectiva la tecnología, dispositivo o componente que, en el curso normal de su operación, sea apta para controlar el acceso a una obra, interpretación o ejecución o fonograma protegido, o para proteger cualquier derecho de autor o cualquier derecho conexo frente a usos no autorizados y que no pueda ser eludida accidentalmente.

**Parágrafo 2°.** Para los efectos de la presente ley se entenderá por información sobre la gestión de derechos la información que identifica la obra, interpretación o ejecución o fonograma; al autor de la obra, al artista intérprete o ejecutante de la interpretación o ejecución, o al productor del fonograma; o al titular de cualquier derecho sobre la obra, interpretación o ejecución o fonograma; o información sobre los términos y condiciones de utilización de las obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas; o cualquier número o código que represente dicha información, cuando cualquiera de estos elementos de información estén adjuntos a un ejemplar de la obra, interpretación o

ejecución o fonograma o figuren en relación con la comunicación o puesta a disposición al público de una obra, interpretación o ejecución o fonograma.

**Parágrafo 3°.** *Medidas cautelares.* En los procesos civiles que se adelanten como consecuencia de la infracción a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos, o por la realización de las actividades descritas en este artículo de la presente ley, son aplicables las medidas cautelares propias de los procesos declarativos establecidas por el Código General del Proceso.

**Artículo 13.** *Excepciones a la responsabilidad por la elusión de las medidas tecnológicas.* Las excepciones a la responsabilidad consagrada en los literales a) y b) del artículo anterior son las siguientes, las cuales serán aplicadas en consonancia con los párrafos de este artículo.

- a) Actividades de buena fe no infractoras de ingeniería inversa realizadas a la copia de un programa de computación obtenida legalmente, siempre que los elementos particulares de dicho programa no hubiesen estado a disposición inmediata de la persona involucrada en dichas actividades, con el único propósito de lograr la interoperabilidad de un programa de computación creado independientemente con otros programas.
- b) Actividades de buena fe no infractoras, realizadas por un investigador que haya obtenido legalmente una copia, interpretación o ejecución no fijada o muestra de una obra, interpretación o ejecución o fonograma, y que haya hecho un esfuerzo de buena fe por obtener autorización para realizar dichas actividades, en la medida necesaria, y con el único propósito de identificar y analizar fallas y vulnerabilidades de las tecnologías para codificar y decodificar la información.
- c) La inclusión de un componente o parte con el único fin de prevenir el acceso de menores al contenido inapropiado en línea en una tecnología, producto, servicio o dispositivo que por sí mismo sea diferente de los mencionados en el literal b) del artículo 12.
- d) Actividades de buena fe no infractoras autorizadas por el dueño de una computadora, sistema de cómputo o red de cómputo con el único fin de probar, investigar o corregir la seguridad de dicha computadora, sistema de cómputo o red de cómputo.
- e) El acceso por parte de bibliotecas, archivos o instituciones de todos los niveles educativos, sin fines de lucro, a una obra, interpretación o ejecución o fonograma a la cual no tendrían acceso de otro modo, con el único fin de tomar decisiones sobre adquisiciones.

- f) Actividades no infractoras con el único fin de identificar y deshabilitar la capacidad de realizar de manera no divulgada la recolección o difusión de datos de identificación personal que reflejen las actividades en línea de una persona natural, de manera que no tenga otro efecto en la capacidad de cualquier persona de obtener acceso a cualquier obra.
- g) Usos no infractores de una clase particular de obra, interpretación o ejecución, fonograma o emisión, teniendo en cuenta la existencia de evidencia sustancial de un impacto adverso real o potencial en aquellos usos no infractores.

El Gobierno nacional a través de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor hará una revisión periódica, en intervalos de no más de tres años, para determinar la necesidad y conveniencia de emitir un concepto en que se consagren los usos no infractores que han de ser objeto de la excepción prevista en este literal. Los usos no infractores mencionados en el concepto de la Dirección Nacional de Derecho de Autor serán permanentes, pero susceptibles de revocación, si desaparece la excepción o limitación al derecho de autor o a los derechos conexos en que se fundamentó la excepción de la medida tecnológica o si hay evidencia sustancial de que la necesidad de su existencia ha desaparecido.

Para esta revisión la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor evaluará las inquietudes que sean planteadas a través de la Subcomisión de Derecho de Autor de la Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual (CIPI), la que a través de un proceso de socialización amplio y suficiente, recogerá en un documento las inquietudes manifestadas por los beneficiarios de las limitaciones y excepciones, así como por los titulares de derechos.

- h) Usos no infractores de una obra, interpretación o ejecución, fonograma o emisión, amparados por las limitaciones y excepciones establecidas por la ley en favor de toda persona con y/o en situación de discapacidad en los términos de la Ley 1618 de 2013, que, en razón a las barreras definidas en dicha ley, no pueda acceder a las obras en los modos, medios y formatos de comunicación accesibles de su elección y adecuados a su tipo de discapacidad.
- i) La actividad legalmente autorizada de investigación, protección, seguridad de la información o inteligencia, llevada a cabo por empleados, agentes o contratistas del Gobierno. Para los efectos de este numeral la seguridad de la información comprende, entre otras actividades, pruebas de vulnerabilidad, hacking ético y análisis forense,

llevadas a cabo para identificar y abordar la vulnerabilidad de una computadora, un sistema de cómputo o una red de cómputo gubernamentales.

**Parágrafo 1°.** Todas las excepciones a las conductas establecidas en el presente artículo aplican para las medidas tecnológicas efectivas que controlen el acceso a una obra, interpretación o ejecución o fonograma.

**Parágrafo 2°.** A las actividades relacionadas en el artículo 12 literal b), cuando se refieran a medidas tecnológicas que controlen el acceso a una obra, interpretación, ejecución o fonograma, solo se aplicarán las excepciones establecidas en los literales a), b), c), d) del presente artículo.

**Parágrafo 3°.** A las actividades relacionadas en el artículo 12 literal b), cuando se refieran a medidas tecnológicas que protegen cualquier derecho de autor o cualquier derecho conexo al derecho de autor frente a usos no autorizados, solo se aplicará la excepción establecida en el literal a) del presente artículo.

**Parágrafo 4°.** Las medidas tecnológicas adoptadas para restringir usos no autorizados que protegen cualquier derecho de autor o cualquier derecho conexo podrán ser eludidas cuando el uso de una obra, interpretación o ejecución, fonograma o emisión, este amparado en una limitación o excepción establecida en la ley, salvo aquella consagrada en el artículo 44 de la Ley 23 de 1982.

**Artículo 14.** Las disposiciones de los artículos 13 de la presente ley se aplicarán a todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, fonogramas y emisiones que, al momento de la entrada en vigencia de la presente ley no hayan pasado al dominio público.

**Artículo 15. *Obligación de informar.*** Quien incorpore una medida tecnológica para controlar el acceso o los usos no autorizados de las obras, interpretaciones o ejecuciones, fonogramas o emisiones de los organismos de radiodifusión está obligado a informar sobre su existencia y alcance. El alcance de esta información, así como la responsabilidad de los titulares de derechos estará enmarcada dentro de los parámetros establecidos en la ley 1480 de 2011, *por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones*, así como aquellas normas que la modifiquen o sustituyan.

**Artículo 16. *Limitaciones y excepciones al derecho de autor y los derechos conexos.*** Sin perjuicio de las limitaciones y excepciones establecidas en la Decisión Andina 351 de 1993, en la Ley 23 de 1982 y en la Ley 1680 de 2013, se crean las siguientes:

- a) La reproducción temporal en forma electrónica de una obra, interpretación o ejecución, fonograma o emisión fijada, que sea transitoria o accesoria, que forme parte integrante y esencial de un proceso tecnoló-

gico y cuya única finalidad consista en facilitar una transmisión en una red informática entre terceras partes por un intermediario, o una utilización lícita de una obra, interpretación o ejecución, fonograma, o emisión fijada que no tengan por sí mismos una significación económica independiente.

Para los fines del presente literal, se entiende que la reproducción temporal en forma electrónica incluye, los procesos tecnológicos que sean necesarios en la operación ordinaria de computadores, dispositivos digitales o de internet, siempre y cuando se cumplan con los requisitos mencionados en el párrafo anterior.

- b) El préstamo por una biblioteca, archivo o centro de documentación, cuyas actividades no tengan directa ni indirectamente fines de lucro, de copias o ejemplares de obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, fonogramas y emisiones fijadas, siempre que figuren en las colecciones permanentes de esta y hubiesen sido lícitamente adquiridas.
- c) La puesta a disposición por parte de bibliotecas, archivos o centros de documentación, a través de terminales especializados instalados en sus propios locales o en función de los servicios de extensión de las bibliotecas públicas de la Ley 1379 de 2010, para fines de investigación o estudio personal de sus usuarios, de obras, fonogramas, grabaciones audiovisuales y emisiones fijadas, lícitamente adquiridas y que no estén sujetas a condiciones de adquisición o licencia.
- d) Se permitirá la transformación de obras literarias y artísticas divulgadas, siempre que se realice con fines de parodia y caricatura, y no implique un riesgo de confusión con la obra originaria.
- e) Se permitirá la reproducción por medios reprográficos para la enseñanza o para la realización de exámenes por instituciones de todos los niveles educativos, en la medida justificada por el fin que se persiga, de artículos lícitamente publicados en periódicos o colecciones periódicas, breves extractos de obras lícitamente publicadas, y obras aisladas de carácter plástico, fotográfico o figurativo, a condición que tal utilización se haga conforme a los usos honrados y que la misma no sea objeto de venta u otra transacción a título oneroso, ni tenga directa o indirectamente fines de lucro. Lo anterior siempre que se incluya el nombre del autor y la fuente.

**Artículo 17. Actualización de limitaciones y excepciones.** El Gobierno nacional, a través de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, convocará anualmente al menos una audiencia

pública, con el fin de realizar una revisión periódica de las limitaciones y excepciones al derecho de autor y los derechos conexos, con el objetivo de determinar la necesidad y conveniencia de presentar ante el Congreso de la República un proyecto de ley que reforme o consagre limitaciones y excepciones al derecho de autor.

Dicho proyecto deberá observar las reglas establecidas en los tratados internacionales ratificados por Colombia para incorporar limitaciones y excepciones al derecho de autor y a los derechos conexos, y tendrá como finalidad armonizar las prerrogativas consagradas en favor de los autores y titulares, de los usuarios frente al acceso a la información, los avances tecnológicos y otros derechos fundamentales.

El proceso de revisión periódica deberá contar con la participación activa de la sociedad civil con la que se deberán efectuar consensos y procesos de publicidad amplia y suficiente, con el fin de generar acuerdos comunes *en torno* a los nuevos listados que actualicen las limitaciones y excepciones a los que refiere el artículo 16.

## CAPÍTULO II

### Disposiciones relativas a obras huérfanas

**Artículo 18. Obras huérfanas.** Para los efectos de esta ley se entenderá por obras huérfanas las obras o fonogramas que estén protegidas por el derecho de autor o derechos conexos y que hayan sido publicadas por primera vez en Colombia o, a falta de publicación, cuya primera radiodifusión haya tenido lugar en Colombia, en los que ninguno de los titulares de los derechos sobre dicha obra o fonograma está identificado o si, de estarlo uno o más de ellos no ha sido localizado a pesar de haber efectuado una búsqueda diligente de los mismos, debidamente registrada con arreglo al artículo 21.

**Artículo 19. Identificación de los titulares.** Si existen varios titulares de derechos sobre una misma obra o un mismo fonograma y no todos ellos han sido identificados o, a pesar de haber sido identificados, no han sido localizados tras haber efectuado una búsqueda diligente, debidamente registrada con arreglo al artículo 21, la obra o el fonograma se podrán utilizar de conformidad con la presente ley, siempre que los titulares de derechos que hayan sido identificados y localizados hayan autorizado, en relación con los derechos que ostenten.

**Artículo 20. Personas autorizadas y ámbito de aplicación para hacer uso de obras huérfanas.** Podrán hacer usos de las obras huérfanas que se encuentren en sus repositorios, las bibliotecas, centros de enseñanza y museos, accesibles al público, así como archivos, organismos de conservación del patrimonio cinematográfico o sonoro y organismos públicos de radiodifusión, con domicilio en Colombia, con el fin de alcanzar objetivos relacionados con su misión siempre y cuando este sea de interés público, y se trate de:

- a) Obras publicadas en forma de libros, revistas especializadas, periódicos, revistas u otro material impreso que figuren en las colecciones de bibliotecas, centros de enseñanza o museos, accesibles al público, así como en las colecciones de archivos o de organismos de conservación del patrimonio cinematográfico o sonoro;
- b) Obras cinematográficas o audiovisuales y los fonogramas que figuren en las colecciones de bibliotecas, centros de enseñanza o museos, accesibles al público, así como en las colecciones de archivos o de organismos de conservación del patrimonio cinematográfico o sonoro;
- c) Obras cinematográficas o audiovisuales y los fonogramas producidos por organismos públicos de radiodifusión que figuren en sus archivos y que estén protegidas por derechos de autor o derechos conexos a los derechos de autor y que hayan sido publicadas por primera vez en el país o, a falta de publicación, cuya primera radiodifusión haya tenido lugar en Colombia.

**Parágrafo 1°.** Las obras y los fonogramas a que se hace referencia en los literales a), b) y c), que nunca hayan sido publicados ni radiodifundidos en Colombia, pero que hayan sido puestos a disposición del público por las entidades mencionadas en otros países, con el consentimiento de los titulares de derechos, siempre y cuando sea razonable suponer que los titulares de derechos no se opondrían a los usos contemplados en el artículo 23.

**Parágrafo 2°.** Las normas de este capítulo se aplicarán también a las obras y otras prestaciones protegidas que estén insertadas o incorporadas en las obras o los fonogramas a que se refieren los apartados anteriores o que formen parte integral de estos.

**Artículo 21. *Búsqueda diligente.*** A efectos de determinar si una obra o un fonograma son obras huérfanas, las entidades mencionadas en el artículo 20, efectuarán una búsqueda diligente y de buena fe por cada obra u otra prestación protegida, consultando para ello las fuentes adecuadas en función de la categoría de obra y de cada prestación protegida independientemente consideradas. La búsqueda diligente se efectuará con carácter previo al uso de la obra o del fonograma.

La búsqueda diligente se efectuará, en el lugar de la primera publicación o, a falta de publicación, de primera radiodifusión. Sin embargo, si existen pruebas que sugieran que en otros países existe información pertinente sobre los titulares de derechos, deberá efectuarse asimismo una consulta de las fuentes de información disponibles en esos países.

En el caso a que se refiere el artículo 20, parágrafo 1°, la búsqueda diligente deberá efectuarse en el país en el que se encuentre establecida la entidad que haya puesto la obra o el fonograma a disposición del público con el consentimiento del titular de derechos.

El Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior y con la coordinación de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, reglamentará la materia indicando cuáles son las fuentes de información que resultan adecuadas para la búsqueda de autores y titulares en cada categoría de obras o fonogramas en consulta con los titulares de derechos y los usuarios, e incluirán como mínimo, la información del registro nacional de derecho de autor, así como las bases de datos de las diferentes sociedades de gestión colectiva.

**Artículo 22. *Prueba de la búsqueda diligente.*** Las entidades mencionadas en el artículo 20, inscribirán en el registro nacional de derecho de autor, administrado por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, previo a realizar los usos consagrados en el artículo 23 de la presente ley, sus búsquedas diligentes y tendrán a disposición del público en general, la siguiente información:

- a) Los resultados de las búsquedas diligentes que dichas entidades hayan efectuado y que hayan llevado a la conclusión de que una obra o un fonograma debe considerarse obra huérfana;
- b) El uso que las entidades hacen de las obras o fonogramas huérfanas, de conformidad con la presente ley;
- c) Cualquier cambio, de conformidad con el artículo 24, en la condición de obra huérfana de las obras y los fonogramas que utilizan las entidades;
- d) La información de contacto pertinente de la entidad en cuestión.

El Gobierno nacional apropiará los recursos necesarios para dicha labor y, a través del Ministerio del Interior, con la coordinación de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, reglamentará la forma de realizar el mencionado registro.

**Artículo 23. *Utilización de obras huérfanas.*** Las entidades a que se refiere el artículo 20, podrán realizar, sin autorización del autor o titular, los usos que se establecen a continuación, en relación con las obras huérfanas que figuren en sus colecciones:

- a) Puesta a disposición del público de la obra huérfana.
- b) Reproducción, a efectos de digitalización, puesta a disposición del público, indexación, catalogación, conservación o restauración.

**Parágrafo 1°.** Las entidades a que se refiere el artículo 20, podrán hacer uso de una obra huérfana

con arreglo del presente artículo únicamente a fines del ejercicio de su misión de interés público, en particular la conservación y restauración de las obras y los fonogramas que figuren en su colección, y la facilitación del acceso a los mismos con fines culturales y educativo. Las entidades podrán obtener ingresos en el transcurso de dichos usos, a los efectos exclusivos de cubrir los costes derivados de la digitalización de las obras huérfanas y de su puesta a disposición del público.

**Parágrafo 2º.** Cualquier utilización de una obra huérfana por parte de las entidades a que se refiere el artículo 20, se entenderá sin perjuicio de indicar el nombre de los autores y otros titulares de derechos que sí han sido identificados.

**Artículo 24. Fin de la condición de obra huérfana.** Los titulares de derechos sobre una obra o un fonograma que se consideren obras huérfanas tendrán en todo momento la posibilidad de poner fin a dicha condición de obra huérfana en lo que se refiere a sus derechos.

**Artículo 25. Compensación por uso de una obra huérfana.** Los titulares de derechos que pongan fin a la condición de obra huérfana de sus obras u otras prestaciones protegidas recibirán una compensación equitativa por el uso que las entidades a que se refiere el artículo 20 hayan hecho de dichas obras y otras prestaciones protegidas con arreglo al artículo 23 de la presente ley. El Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, con la coordinación de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, reglamentará la materia.

**Artículo 26. Continuación de la vigencia de otras disposiciones legales.** Las disposiciones de este capítulo se entenderán sin perjuicio de las disposiciones relativas, en particular, a los derechos de patente, las marcas comerciales, los modelos de utilidad, los diseños industriales, la protección del patrimonio nacional, los requisitos sobre depósito legal, la legislación sobre prácticas restrictivas y competencia desleal, el secreto comercial, la seguridad, la confidencialidad, la protección de datos y el derecho a la intimidad, el acceso a los documentos públicos y el derecho de contratos, así como a las normas relativas a la libertad de prensa y la libertad de expresión en los medios de comunicación.

**Artículo 27. Aplicación en el tiempo.** Las disposiciones sobre obras huérfanas se aplicarán con respecto a todas las obras y todos los fonogramas a que se refiere el artículo 20 que estén protegidos por la legislación sobre derecho de autor y derechos conexos a la fecha de expedición de la presente ley, así como para las que sean creadas con posterioridad a la entrada en vigor de esta.

### CAPÍTULO III

#### Depósito legal

**Artículo 28.** El editor, el productor de obras audiovisuales, el productor fonográfico

y videgrabador, establecidos en el país, de toda obra, fonograma o videograma que hayan sido divulgadas y circulen en Colombia, deberá cumplir, dentro de los 60 días hábiles siguientes a su publicación, transmisión pública, reproducción o importación, con el depósito legal de las mismas ante las entidades y en la cantidad definida en la reglamentación que para el efecto expedirá el Gobierno nacional.

El incumplimiento de las obligaciones derivadas del depósito legal será sancionado por el Ministerio de Cultura, con un salario mínimo legal diario vigente por cada día de retraso en el cumplimiento de tales obligaciones y hasta el momento en que se verifique su cumplimiento, sin superar 10 salarios mínimos mensuales por cada ejemplar que incumpla el depósito. El responsable del depósito legal que no haya cumplido esta obligación no podrá participar directamente o por interpuesta persona en procesos de contratación estatal para la adquisición de libros y dotaciones bibliotecarias, hasta tanto cumpla con dicha obligación y en su caso, hubiera pagado en su totalidad las sanciones pecuniarias impuestas.

La mencionada sanción será impuesta mediante resolución motivada, la cual puede ser objeto de recursos en vía gubernativa.

En caso de incumplimiento del depósito legal y una vez finalizado el plazo señalado, la Biblioteca Nacional de Colombia con la finalidad de preservar la memoria cultural de la Nación podrá realizar la reproducción de las obras, fonogramas o videogramas que no hayan sido depositadas por quienes tenían la obligación legal de hacerlo.

La Biblioteca Nacional de Colombia con la finalidad de garantizar el acceso al patrimonio cultural podrá hacer la puesta a disposición para su consulta en sala, a través de terminales especializados instalados en sus propios locales de las obras, fonogramas o videogramas, tomando las medidas efectivas para impedir cualquier otro tipo de utilización que atente contra la explotación normal de la obra o cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o titular del derecho.

El Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio del Interior - Unidad Administrativa Especial

Dirección Nacional de Derecho de Autor y el Ministerio de Cultura - Biblioteca Nacional de

Colombia, reglamentarán el depósito legal.

### CAPÍTULO IV

#### Disposiciones relativas a la observancia del derecho de autor y los derechos conexos

**Artículo 29. Procedimiento ante la jurisdicción.** Las cuestiones que se susciten con motivo de la aplicación de esta ley serán resueltas por la jurisdicción ordinaria o por las autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales.

**Artículo 30. Solicitud de información.** Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 33 de la Constitución Política, las autoridades judiciales competentes para resolver los procesos de infracción en materia de derecho de autor y/o derechos conexos, estarán facultadas para ordenarle al infractor que proporcione cualquier información que posea respecto de cualquier persona involucrada en la infracción, así como de los medios o instrumentos de producción o canales de distribución utilizados para ello.

**Artículo 31. Destrucción de implementos y mercancía infractora.** En los procesos sobre infracciones al derecho de autor, los derechos conexos, la elusión de medidas tecnológicas o la supresión o alteración de cualquier información sobre la gestión de derechos, el juez estará facultado para ordenar que los materiales e implementos que hayan sido utilizados en la fabricación o creación de dichas mercancías infractoras sean destruidos, a cargo de la parte vencida y sin compensación alguna, o en circunstancias excepcionales, sin compensación alguna, se disponga su retiro de los canales comerciales.

En el caso de mercancías consideradas infractoras, el juez deberá ordenar su destrucción, a cargo de quien resulte condenado en el proceso, a menos que el titular de derecho consienta en que se disponga de ellas de otra forma. En ningún caso los jueces podrán permitir la exportación de las mercancías infractoras o permitir que tales mercancías se sometan a otros procedimientos aduaneros, salvo en circunstancias excepcionales.

**Artículo 32. Indemnizaciones preestablecidas.** La indemnización que se cause como consecuencia de la infracción a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos o por las conductas descritas en la presente ley, relacionadas con las medidas tecnológicas y la información para la gestión de derechos, podrá sujetarse al sistema de indemnizaciones preestablecidas o a las reglas generales sobre prueba de la indemnización de perjuicios, a elección del titular del derecho infringido. El Gobierno nacional reglamentará la materia.

**Artículo 33. Vigencia.** La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga los artículos 58 a 71 y 243 de la Ley 23 de 1982, así como las disposiciones que le sean contrarias.

En los anteriores termino fue aprobado Proyecto de ley número 206 de 2018 Senado número 222 de 2018 Cámara, por la cual se modifica la Ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones en materia de derecho de autor y derechos conexos, como consta en la sesión conjunta de las comisiones primeras de senado y Cámara del 18 de abril de 2018, correspondiente al Acta número 09 sesiones conjuntas.

Ponentes:



**CONTENIDO**

Gaceta número 211 - Viernes, 4 de mayo de 2018

CÁMARA DE REPRESENTANTES

PONENCIAS

	<b>Págs.</b>
Ponencia para segundo debate en Cámara de Representantes, texto definitivo y texto aprobado en la Comisión Primera al Proyecto de ley número 017 de 2017 Cámara, por medio del cual se crea la lista “Ser Pillo No Paga” vinculada a la Comisión de Delitos contra la Administración Pública y el patrimonio público como medida de castigo para los responsables por hechos de corrupción y se dictan otras disposiciones. ....	1
Informe de ponencia para segundo debate en plenarias del senado y de la Cámara de Representantes, texto propuesto y texto aprobado por las Comisiones Primeras del honorable senado de la República y de la honorable Cámara de Representantes al Proyecto de ley número 206 de 2018 Senado, 222 de 2018 cámara, por la cual se modifica la Ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones en materia de Derecho de Autor y Derechos Conexos” .....	8